

~~BUCHENDER~~ (100200)
BUCHENDER

② 2

Entre la ruta y el barrio

La experiencia de las
organizaciones piqueteras

darmería Nacional, Policía Federal y policías provinciales y, más recientemente, complementadas con el activo de Prefectura, ha culminado con el asesinato de numerosos manifestantes y militantes piqueteros en distintos lugares del país, en una lista que comienza por Teresa Rodríguez (Cutral-Co, abril de 1997) y se extiende a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (Puente Pueyrredón, junio de 2002).

Por todas estas razones y seguramente otras más que podrá detectar el lector, éste no es un libro que apele a una suerte de distancia imparcial o busque acantonarse en ideológicos discursos sobre la neutralidad valorativa. En realidad, nunca hemos creído ni apostado a que exista una única y cierta manera de abordar o producir el conocimiento. En este sentido, tendemos a pensar, más modestamente, que es posible construir conocimiento en ese vaivén inestable, suerte de equilibrio tensional entre, por un lado, el compromiso sincero con una realidad que nos envuelve, nos constituye y nos atraviesa fuertemente y, por otro lado, el obligado distanciamiento crítico que requiere la investigación en las ciencias sociales.

Retomando a Norbert Elias, creemos que hay que partir de un doble reconocimiento: primero, de la certeza de que nadie nos asegura una convivencia ordenada de esta interrelación entre compromiso y distanciamiento; segundo, que de esta tensión depende no sólo la producción de conocimiento sino también la vida social, pues "esta se quebraría si uno de estos dos impulsos avanzara demasiado en una de estas dos direcciones". Si el verdadero desafío consiste, pues, en que "los impulsos hacia el compromiso y los impulsos hacia el distanciamiento se mantengan en jaque unos a otros" (Elias, 1990: 12), entonces, sólo durante el recorrido tanto el lector como nosotros mismos podremos ir discerniendo si verdaderamente hemos ganado tanto en términos de producción de conocimiento como de implicación en nuestra realidad social.

MARISTELLA SVAMPA y SEBASTIÁN PEREYRA
Buenos Aires, abril de 2003

CAPÍTULO 1

Las dos vertientes del movimiento piquetero

El movimiento piquetero, en tanto "movimiento de movimientos"¹, reconoce dos afluentes fundamentales: por un lado, reenvía a las acciones disruptivas, evarocentes y por momentos unificadoras, de los piquetes y puebladas del interior, resultado de una nueva experiencia social comunitaria vinculada al colapso de las economías regionales y a la privatización acelerada de las empresas del Estado realizada en los 90; por otro lado, remite a la acción territorial y organizativa gestada en el conurbano bonaerense y ligada a las lentas y profundas transformaciones del mundo popular, producto de un proceso de desindustrialización y empobrecimiento creciente de la sociedad argentina que arrancó en la década de los 70.

El primer afluente nos empuja en la perspectiva de la continuidad. En rigor, podríamos decir que el movimiento piquetero nace allí donde la desarticulación de los marcos socioculturales y laborales se realiza de manera brusca y vertiginosa, allí donde la experiencia de la desocupación adquiere un carácter masivo, allí donde el desarraigo de tanto como la desocupación reúnen en un solo haz un conglomerado heterogéneo de categorías sociales. Así, la cuna del movimiento piquetero está en las ciudades petroleras, Cutral-Co y Plaza Huincul, en Neuquén, y, sobre todo, Mosconi y Tartagal, en Salta; esto es, ciudades cuya vida estaba estructurada en torno de YPF, la mayor empresa productiva del Estado. En este sentido, es necesario subrayar que los primeros piqueteros se contaban entre los (ex) trabajadores mejor pagados del (ex) Estado de bienestar, con una carrera estable que incluía familias y generaciones completas socializadas en el marco de la estabilidad y el bienestar social. Asimismo, resulta importante subrayar que los primeros cortes de ruta, iniciados en 1996 por las fuerzas de seguridad desencadenados verdaderos levantamientos populares. Frente a la demanda de creación de puestos de trabajo genuino, el gobierno nacional respondió a través de una serie de políticas, que alternan —hasta el día de hoy— la represión dispersa y selectiva con la cooptación política y, más masivamente, la adjudicación de planes sociales, con contraprestación laboral.

1. La expresión, utilizada para designar a los movimientos antiglobalización, ha sido retomada por el Colectivo Situaciones, para hacer referencia a la heterogeneidad del movimiento piquetero.

El año 1997 marca la inflexión para el naciente movimiento; entonces los cortes de ruta comienzan a reproducirse a lo largo y a lo ancho del país: es de nuevo Cutral-Co, pero ahora se añaden Mosconi y Tartagal, Jujuy, Córdoba, Cruz del Eje, Mar del Plata, La Matanza, Florencio Varela, Quilmes... Como suele suceder, el "efecto contagio" es tal que no reconoce fronteras pero tampoco discrimina categorías sociales: allí hay agricultores, camioneros, empleados estatales, desocupados...

Es también a partir de 1996-1997 cuando se constata la intervención de aquellos actores sociales que constituyen el segundo afluente, y que inscriben su acción en la línea de la continuidad, a saber, dentro de una tradición contestataria más ligada al trabajo en el espacio barrial y la gestión de las necesidades básicas. En este sentido, la súbita visibilidad que el trabajo territorial fue adquiriendo a través de las primeras ollas populares y cortes de ruta puso al descubierto el alcance de ciertas transformaciones operadas dentro del mundo popular, entre ellas, que el barrio en tanto espacio donde interactuaban diferentes organizaciones de base (sociedades de fomento, juntas vecinales, cooperativas, comunidades eclesiales de base y, en algunos casos, organizaciones no gubernamentales) había pasado a ser el centro de las reivindicaciones. Así, es la acumulación de una experiencia de trabajo barrial, ligada a la historia de los asentamientos, sobre todo en La Matanza y, de manera más reciente, en el eje sur del conurbano bonaerense, lo que va a constituir el núcleo de la acción contestataria y, rápidamente, el punto de partida para la organización.

En suma, no es posible comprender la génesis ni el posterior desarrollo del movimiento piquetero si no establecemos su doble filiación: por un lado, la vertiente que pone al descubierto la brusca separación de los marcos sociales y laborales que configuraron la vida cotidiana de generaciones y pueblos enteros; desencastamiento violento que, en el límite, revela tanto una relación más cercana con el mundo del trabajo formal, como refleja la opción de un tipo de acción sindical disruptiva, ligada a un modelo de acción confrontativo; por otro lado, la vertiente que señala la importancia de la matriz específicamente territorial de la acción colectiva, y da cuenta tanto de una distancia mayor en relación con el mundo del trabajo formal como, en el extremo, de la continuidad de una relación más pragmática con los poderes públicos, en la lucha nada fácil por la supervivencia.

En lo que sigue, trazaremos una genealogía del movimiento piquetero que contempla un desarrollo en dos movimientos. Pero, antes de ello, haremos una breve presentación del cuadro de reformas estructurales implementadas durante los años 90, para luego analizar el surgimiento y los primeros avatares de las dos vertientes fundamentales del movimiento piquetero. Veremos que el estilo de presentación varía de un movimiento a otro: así, cuando abordamos la línea de piquetes y puebladas prima el relato -por momentos, vertiginoso- de la sucesión de una serie de movilizaciones y levantamientos que sacudieron el interior del país durante los 90, que terminaron por configurar un tipo de acción modular (el piquete), y una definición positiva del desocupado (el "piquetero"). En la línea territorial predomina una descripción más detenida en el análisis de una acción, que se sabe -y se discute- desde el principio, orientada sistemáticamente hacia la organización, y que terminará por dar forma al modelo territorial a través de diferentes marcos organizativos, desarrollados de manera ejemplar en determinadas regiones del conurbano bonaerense.

Hacia el final, nos detendremos un instante para reflexionar sobre la significación del movimiento piquetero a la luz de las transformaciones del peronismo en el mundo popular. Este rodeo no tiene otro objetivo que proponer ciertas claves que ayuden a entender uno de los hechos más notorios de las últimas décadas: que el surgimiento y la consolidación de amplias estructuras territoriales se ha realizado por fuera, en confrontación y, por cierto, en detrimento de las organizaciones del Partido Justicialista. Así, si buscamos indagar tanto el alcance como las limitaciones de estas nuevas organizaciones, debemos comenzar por instaurar nuestra reflexión en el campo de las transformaciones del peronismo en el mundo popular.

Introducción: cambios estructurales y transformaciones de la acción colectiva

Durante la última dictadura militar (1976-1983) se inició en el país el desmantelamiento del modelo de sustitución de importaciones, acompañado por un fuerte estancamiento económico. Sin embargo, la salida de este modelo se operó finalmente durante la década menemista (1989-1999), a partir de la implementación de un nuevo proyecto económico, orientado hacia la eliminación del déficit fiscal, la desregulación de los mercados y la privatización acelerada de las empresas públicas.

El Plan de Convertibilidad -implementado en 1991 y que acompañó las reformas estructurales- produjo una verdadera transformación de las reglas de juego económicas, entre ellas, la paridad entre el dólar y el peso, la reducción de las barreras aduaneras, la liberalización del comercio exterior y el aumento de la presión fiscal. Fueron suprimidos también los principales mecanismos de control del Estado sobre la economía en favor de las reglas del mercado, al tiempo que se liberalizó la inversión extranjera. El programa de reestructuración global del Estado puso en vigor una fuerte reducción del gasto público, la descentralización administrativa y el traslado de competencias a los niveles provincial y municipal (salud y educación), así como una serie de reformas orientadas a la desregulación y privatización que impactaron fuertemente en la calidad y el alcance de los servicios básicos, hasta ese momento en poder del Estado nacional.

El proceso de descentralización administrativa antecedió y facilitó la focalización de la ayuda social, centrada en la asistencia financiera y alimentaria de las poblaciones más vulnerables. Las reformas estructurales afectaron también el sistema previsional que, de estar basado en un sistema de reparto apoyado sobre la solidaridad intergeneracional, pasó a depender de la capitalización individual, en manos de empresas aseguradoras privadas. Las reformas repercutieron severamente sobre el sistema de salud, a partir de la desregulación de las obras sociales, con la libre elección de los afiliados y la autogestión de los hospitales públicos. Por último, estas reformas contemplaron una serie de medidas que conllevaron la entrada acelerada de la flexibilidad y la precariedad laboral, a partir de la sanción de la Ley Nacional de Empleo (ley 24.013), de 1991, que afectó la modalidad de los contratos (flexibles y temporales). En fin, este conjunto de transformaciones, que impactaron tanto por el carácter drástico como por la celeridad con la cual fueron

implementados. Operaron como consecuencia un cambio en las formas de intervención del Estado en la sociedad, tanto en términos de paralización de políticas públicas, de abandono de la "cuestión social", de control y privatización de la fuerza de trabajo, como otros niveles y ámbitos (Fadulva, 2000).

Entre 1975 y 1990, el producto bruto industrial se contrajo 26 por ciento; el empleo industrial cayó 40 por ciento y la proporción de los remuneraciones de los asalariados en el ingreso nacional pasó de 40 a 37 por ciento. Estos procesos se tradujeron en el creciente empobrecimiento de la sociedad argentina, que comprendió a amplias franjas de asalariados y del sector cuantapropista, a la vez que se produjo un fuerte proceso de polarización en la distribución de los ingresos. Así, la Argentina de principios de los años 90 no es sólo una sociedad empobrecida, sino caracterizada por una creciente desigualdad de las posiciones y las oportunidades. Finalmente, el nuevo modelo económico, aplicado a partir de los 90, no sólo profundizó las tendencias anteriores sino que introdujo una creciente vulnerabilidad de las condiciones de vida de vastos sectores de la población, marcados por la precariedad laboral y el desempleo (Bayón y Saraví, 2002: 3-8).

El impacto de la reforma laboral sobre el funcionamiento del mercado de trabajo fue enorme. Esta incorporó las diversas modalidades de empleo temporario y contratos precarios (que incluía la flexibilidad de los tiempos de trabajo y la introducción del "periodo de prueba"), redujo los aportes patronales y la seguridad social, modificó las normas sobre accidentes y enfermedades laborales y creó un seguro de desempleo que cubría sólo a ciertos sectores del mercado formal.² Sin embargo, no fue sólo una cuestión de reducción de costos de la mano de obra, sino que el proyecto impuso un modelo de crecimiento económico dissociado del bienestar del conjunto de la sociedad, esto es, un modelo de modernización excluyente (Barbeito y Lo Vuolo: 1992). Durante los 90, mientras que la población económicamente activa creció 28 por ciento, el porcentaje de ocupados plenos se incrementó en 9 por ciento, y el desempleo creció 156,3 por ciento y el subempleo, 115,4 por ciento. La pauta general fue el incremento de la productividad, con escasa generación de empleo y deterioro creciente de las condiciones laborales, en especial en el sector industrial. La industria siguió perdiendo peso en el conjunto de los ocupados, al pasar de 24,2 por ciento del empleo total en 1991 a 16,3 por ciento en octubre de 2000 (Bayón y Saraví, 2002: 22-23). En fin, la tasa de desocupación —que era de 6 por ciento en 1990— pasó a 14,7 por ciento en octubre de 2000, habiendo alcanzado un primer pico en 1996, de 18,5 por ciento, y un segundo en mayo de 2002, después del colapso del modelo de convertibilidad, de 21,5 por ciento.

Ahora bien, una transformación tan radical del proyecto económico exigió un cambio fundamental en las alianzas políticas del Partido Justicialista, que dejó de apoyarse masivamente sobre el actor corporativo sindical, como lo hiciera tradicionalmente, para acercarse al corporatismo patronal representado por ciertos grupos oligopólicos y cartelizados de la economía argentina. Esta nueva alianza realizada con los grandes grupos económicos hizo posible la aplicación de la primera reforma del Estado (1991-1995), a partir del abandono de una política de concertación social y de la asunción de una gestión decisionista.

2. Según Beccaria (2001), la cobertura del desempleo era de 6 por ciento de los desocupados en todo el país.

Sin duda, el colapso del antiguo modelo produjo importantes cambios en el mundo sindical tradicionalmente peronista. Las rápidas transformaciones, operadas en un contexto de ajuste del gasto público, aceleraron notablemente el proceso de quiebre del poder sindical, escarmentando sus fines y limitando su peso específico dentro de la sociedad. En primer lugar, a diferencia de épocas recientes, el proceso en marcha marcaba la fuerte hegemonía de las estructuras partidarias por sobre las estructuras sindicales; más aún, el tipo de vínculo se asentaba sobre la clara subordinación de los actores sindicales al líder, pero no precisamente a través del fortalecimiento sino más bien del debilitamiento de las organizaciones genéricas. En segundo lugar, aquella tradición que consistía en obtener mejoras económicas y laborales en función del cual exhaustivo arbitraje del Estado fue severamente cuestionada. Así, en un primer momento, el giro neoliberal pareció elegir a vastos sectores del sindicalismo hacia el costado de los nuevos "perfeccionistas", sobre todo a aquellos cuya base de sustentación social se encontraba en el sector estatal e industrial. Sin embargo, poco después podría verse que estos cambios abrieron el espacio virtual a la autonomía de los actores, a la vez que plantearon la necesidad de una redefinición de los sindicatos como actores sociales.

En suma, las transformaciones operadas a partir de la primera gestión de Carlos Menem produjeron profundas divisiones en el seno del sindicalismo argentino, mayoritariamente peronista. Frontalmente, a comienzos de los 90, irían perfilándose los tres grandes núcleos que darían cuenta tanto de un nuevo posicionamiento en cuanto al rol social de los sindicatos como de una redefinición en relación con la identidad peronista. Siguiendo a Hirschman (1994), podemos decir que, en primer lugar, fue erigiéndose un poderoso bloque representado por los *veceros* de la *lealtad*, y encarnado por la CGT, bajo la conducción de Rodolfo Daer. Allí conviven aquellos gramícos que apoyaron las reformas encarradas por el gobierno, aunque con diversos grados de acatamiento y diferentes estrategias de adaptación.³ Estos sindicatos cubren un amplio arco que va desde los *veceros* portavoces del "nuevo sindicalismo" empresarial, hasta aquellos partidarios de una "vinculación orgánica" con el partido en el poder. En segundo lugar, encaramos una segunda línea que encarna el ala disidente de la CGT oficial, encabezado por el jefe de los camioneros, Hugo Moyano. Allí están los que, cada tanto, cada vez más esporádicamente, hacen escuchar su voz, y pugnan por revivir el modelo sindical asociado a una política sustitutiva de importaciones y a un Estado fuerte. Por último, están aquellos que desde el inicio rechazaron el conjunto de reformas, producto de las nuevas alianzas establecidas por el gobierno justicialista, y eligieron el camino de la *salida* o la *defección*. Bajo el liderazgo de Víctor De Gennaro y de Germán Abdala (este último fallecido tempranamente) la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) se lanzó de lleno a la tarea de construir una nueva central sindical autónoma y alternativa, no partidaria, esto es, dissociada de los dilemas que planteaaba la identidad peronista y la disciplina partidaria. La CTA reúne aquellos sindicatos cuya base de sustentación mayo-

3. Para un análisis en términos de estrategias sindicales frente al proceso de reformas véase Murillo (1997). Para una reconstrucción y análisis del surgimiento de la CTA, véase Armell (2002). Para un análisis de los modelos sindicales en los 90 y su relación con la identidad peronista, Martuccelli y Svampa (1997).

fue afectada por la reforma del Estado (Asociación de Trabajadores del Estado, ATTE y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA).

Pero si es cierto que el giro neoliberal dado por el Partido Justicialista abrió la posibilidad de nuevos espacios de acción autónoma por fuera del sindicalismo tradicional, en el cual decidieron instalarse los voceros de la defeción (ex peronistas, no identificados con el nuevo modelo), no lo es menos que este mismo aspecto también contribuyó al surgimiento de otras alternativas sindicales, identificadas con una tradición más clasista. Nos referimos, claro está, a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), ligada al Partido Comunista Revolucionario (PCR), nacida al calor de las luchas de los trabajadores municipales en Jujuy, bajo el liderazgo de Carlos "Perro" Santillán. Como veremos después, la CCC, que reivindica la tradición del sindicalismo clasista y basista de los años 60 y 70, fue creada en 1994 y cuenta actualmente con tres afluentes (trabajadores ocupados, jubilados y trabajadores desocupados). No constituye una central sino que agrupa a gremios municipales y comisiones internas en fábricas. En fin, desde el punto de vista sindical, tanto la CTA como la CCC han liderado la acción opositora, dentro de un panorama marcado por la cada vez más enflaquecida acción de los sindicatos disidentes, vinculados con algún sector del Partido Justicialista. Por último, digamos que no es casual que ambas organizaciones hayan encabezado el proceso de organización de los incipientes movimientos territoriales, junto con sectores autónomos.

Aunque más adelante analizaremos en detalle este proceso, adelantamos que donde mejor se observan las consecuencias de los cambios estructurales es en el plano de la acción colectiva. Por un lado, a partir de la implementación del Plan de Convertibilidad, las formas tradicionales de acción colectiva, asociadas al formato sindical, disminuyeron, al menos respecto del período democrático inmediatamente anterior. En realidad, a comienzos de los 90, los sistemas de acción colectiva atravesaron por un momento de inflexión histórica, visible tanto en el declive de las formas tradicionales de huelgas como en la emergencia de nuevos repertorios de acción, ligados a movimientos de presión local, de carácter disperso, que pronto comenzarían a alternar cada vez más con acciones espontáneas y semiorganizadas de explosión social. Este primer período —caracterizado por conflictos de carácter puntual y asincrónicos entre ellos es ilustrado por las acciones que encabezaron los empleados públicos en diferentes provincias: Río Negro, Córdoba, Jujuy, entre otros— encuentra su máxima expresión en el *santiagueñazo* (1993). En fin, en este período los nuevos repertorios de acción colectiva⁴ aparecen cruzados, en mucho, por un lenguaje atravesado por la apelación pura a la dignidad. En realidad, no será sino entre 1996-1997, a partir del levantamiento de las ciudades petroleras, cuando los nuevos repertorios de acción van a confluir y alimentar el proceso de gestación de un nuevo actor social.

4. Sobre la noción de "repertorios de acción colectiva", véase principalmente Tilly (1995) y Tarrow (1997 y 1999).

Parte I

El eje de piquetes y puebladas. Acción evanescente y surgimiento de un nuevo actor

El largo proceso de configuración identitaria así como la conformación de múltiples organizaciones piqueteras en distintos lugares del país puede ser dividido en dos etapas graduales, que serán analizadas como sucesivas olas de movilización que vuelven visible e instalan la "cuestión piquetera" en la escena política nacional. Un primer momento se inicia en los legendarios cortes y puebladas de Neuquén, Salta y Jujuy entre 1996 y 1997. Esos conflictos representan el punto inicial en el cual una nueva identidad —los piqueteros—, un nuevo formato de protesta —el corte de ruta—, una nueva modalidad organizativa —la asamblea— y un nuevo tipo de demanda —el trabajo— quedan definitivamente asociados, originando una importante transformación en los repertorios de movilización de la sociedad argentina.

Esta transformación se vuelve extraordinariamente evidente si se comparan esos procesos de movilización con el repertorio clásico de acción sindical. De ese modo, la declinación de las huelgas y los paros —como formatos típicos de la movilización sindical— así como de los propios sindicatos como actores de la protesta y de los reclamos salariales constituyen expresiones del movimiento que intentaremos describir y analizar. Sin embargo, la imagen de una retirada de la acción sindical puede resultar apresurada y quizá convenga revisar más detenidamente la trayectoria y los cambios de estrategias de los distintos alineamientos sindicales y sus procesos de transformación. Encontraremos entonces que, por un lado, el ciclo de movilización que incluye las puebladas y los piquetes tiene una impronta fuertemente sindical dada por la constante movilización de los gremios de docentes y estatales en todo el país y, por otro, que varias líneas sindicales —al igual que algunas partidarias— decidieron en la segunda mitad de los 90 volcarse progresivamente hacia la organización de desocupados —y levantar sus banderas—, hecho que marca el salto de las organizaciones piqueteras hacia la masividad. La consolidación del nuevo repertorio tiene menos la forma de un reemplazo que la de una nueva alianza y articulación entre sindicatos disidentes, partidos —de izquierda— y desocupados, poco a poco reunidos bajo la simbología piquetera.

Este apartado intentará dar cuenta de ese momento constitutivo que tiene para nosotros una importancia fundamental pues representa uno de los dos principales "afluentes" del movimiento piquetero. Tanto en términos de actores y de prácticas como también de símbolos y mitos, la ola de cortes y puebladas de mediados de los 90 es fundamental para entender el desarrollo posterior que adquieren las organizaciones piqueteras y su proyección a nivel nacional.⁵

En lo que sigue, un primer punto intentará situar la emergencia de esas nuevas formas de movilización en el contexto de la transformación económica y social de la Argentina de los 90. Luego, en un segundo punto, nos concentraremos en la manera en que las movilizaciones de 1996 y 1997 consolidaron un nuevo nombre, un nuevo formato y nuevos reclamos —un nuevo repertorio— en la política argentina.

5. El análisis de ese segundo momento se presenta en la Parte II del capítulo 2.

a) Las transformaciones y las temporalidades de la movilización⁶

Mucho antes de que —durante la segunda mitad de la década de los 90— las protestas se generalizaran y adquirieran visibilidad en una escala nacional, intensos y variados procesos de movilización tuvieron lugar fundamentalmente en el interior de nuestro país. Sin embargo, la pregunta que se impone frente a esos procesos de movilización es por qué o de qué manera, aun cuando la profundización de la desindustrialización y la reforma del Estado generaron un alto nivel de protesta por parte de diversos actores de la sociedad argentina, éstos no cuestionaron seriamente la legitimidad del gobierno nacional ni de los procesos de reforma en curso.

En estas páginas analizaremos la organización de esos procesos de movilización social en los primeros años de la década del 90, considerando, por un lado, que la aceleración del proceso de desindustrialización y de reforma del Estado provocó un alto nivel de conflictividad pero que, por otro, esa conflictividad pudo ser "procesada" por el sistema político en la medida en que se mantuvo atrapada entre las dimensiones locales y nacional de la política argentina. Así, una suerte de desdoblamiento entre el poder político nacional y los estados provinciales permitió que se mantuviera durante los años del menemismo una dinámica de descentralización del conflicto, aun incluso frente a diversas estrategias de nacionalización ensayadas por algunos actores movilizados.

Esa dinámica descentrada del conflicto es la que se expresó —desde el punto de vista de la política nacional— en acciones evanescentes, aisladas, "estallidos sociales", ciclos de movilización que parecían no venir de ningún lado y que luego —al día siguiente— eran reabsorbidos sin producir aparentes "cambios de rumbo". Intensos procesos de movilización poblaron entonces el panorama del interior de la Argentina. Este es el caso de Santiago del Estero, en diciembre de 1993.

Aun cuando existen importantes transformaciones en sus formas de movilización, el actor que lidera la protesta en la primera mitad de los 90 es el sindicalismo, pero ocurre que —como fue analizado— la realidad del sindicalismo argentino varió considerablemente durante ese período.

A mediados de 1989, en medio de la crisis hiperinflacionaria, la movilización era poco menos que generalizada y esa situación prácticamente se continuó con los reclamos vinculados a los procesos de privatización durante los primeros dos o tres años de gobierno menemista. En realidad, el reclamo constante a nivel nacional sólo fue sostenido por los gremios de docentes (CTERA) y estatales (ATE) que ya comenzaban a definir su identidad como sindicalismo disidente (CTA). Estos gremios junto con algunos otros —ciertamente un sector de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y del gremio de transportes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA)— ya venían fuertemente movilizados a partir de su alineamiento con la CGT-Azopardo de Saúl Ubaldini, que había liderado la oposición del sindicalismo durante los últimos años de gobierno alfonsínista.

6. La mayor parte de la información sobre los conflictos y las protestas registrados en la década del 90 pertenece a un trabajo de relevamiento realizado por un equipo de investigación del Instituto Gino Germani dirigido por Federico L. Schuster, a quien agradecemos habernos facilitado los resultados. También se utilizan datos consignados en Farinetti (1997).

—Por último, hacia fines de 1991 la progresiva diferenciación entre una alineación sindical que buscaba adaptarse frente a las transformaciones económicas y otra que comenzaba a buscar herramientas de resistencia, quedó definida. Junto con la salida del gobierno de un grupo de diputados peronistas, el sindicalismo disidente tomó forma y programa hacia fines de 1992 con la realización del Congreso Nacional de los Trabajadores Argentinos. Como hemos dicho, lo más significativo de este nuevo proceso de escisión sindical será no tanto la ruptura en sí cuanto el progresivo alejamiento de la nueva central sindical de la relación orgánica con el Partido Justicialista y de manera más ambigua con la identidad peronista.

Junto a esa progresiva diferenciación conflictiva, los gremios enrolados en la CTA se encontraron sumamente afectados por las transformaciones económicas y políticas durante los 90. A pesar de que el Pacto Fiscal firmado en 1992 liberó flujos mayores de fondos para las provincias, la crisis fiscal de éstas, lejos de solucionarse, se agravó progresivamente a causa de las políticas de descentralización de la educación y la salud. Esas crisis se manifestaron reiteradas veces en la imposibilidad del pago de salarios en término o de un progresivo deterioro de infraestructura y condiciones de trabajo.⁷ El reclamo de maestros, empleados estatales y personal de la salud en las provincias argentinas es constante durante los 90. Esos conflictos, urgentes y acuciantes, tenían como interlocutores a los gobiernos municipales y provinciales como encargados directos de resolver los problemas. Las crisis no fueron constantes ni homogéneas —porque las administraciones y las políticas variaban de provincia en provincia—, con lo cual la política de nacionalización del conflicto encontraba fuertes resistencias y contratiempos. Los empleados no dejaban de cobrar en todos lados al mismo tiempo y no en todas las jurisdicciones la magnitud de la crisis era la misma, sencillamente porque la estructura económica de las provincias varía considerablemente.⁸

En cualquier caso, lo más interesante de este proceso es que se abrió un espacio entre la política nacional y la provincial —entre la administración nacional y las provinciales como instancias de negociación— que permitió o que operó una diseminación del conflicto y supuso, por ejemplo para aquellos que planteaban una estrategia global de confrontación con el modelo económico, la tarea adicional de juntar las piezas o los retazos de conflicto que emergían y desaparecían en distintos lugares del país y que estaban sujetos a temporalidades distintas y a múltiples instancias de negociación. A lo largo de un proceso de negociación, la doble responsabilidad —triple, en el caso de intervención de los municipios— representó un recurso invaluable para dilatar y desgastar las fuentes de conflicto.

7. "Los gobiernos provinciales, jaqueados por la crisis financiera, el descenso de los recursos fiscales y el acrecentamiento de las presiones del gobierno nacional por el ajuste, no tuvieron otra opción que poner en marcha las reformas que habían evitado hasta entonces: centralmente, la privatización de empresas públicas y la transferencia de los sistemas previsionales al gobierno central" (Gerchunoff y Torre, 1996).

8. Farinetti (1997) constata: "En el sector privado, el gobierno ha tendido a correrse de un papel activo en la mediación de las relaciones laborales. En el público, los procesos de descentralización administrativa transfirieron el eje de la conflictividad hacia los gremios provinciales y municipales" (p. 32).

Solo dos conflictos lograron mantener un carácter nacional durante los primeros años de la década, por un lado, el de los empleados públicos nacionales—afectados por la reestructuración de la administración y por el congelamiento de la carrera pública en 1991— y, por otro lado, el de los jubilados afectados por el programa global de ajuste y transformación del sistema previsional. Ni uno ni otro tuvieron un impacto fuerte en las provincias. Más tarde, recién hacia 1997, la instalación de la Carpa Blanca representará quizá la única experiencia de articulación nacional—largamente basada por CTERA en particular y por la CTA en general—del conflicto de la educación desdoblado de su componente sindical—y planteándolo como un problema de derecho cívico respecto de la educación pública.

Un segundo eje de transformaciones económicas es el de las privatizaciones, que no fueron objeto de reclamos en un sentido global ni dieron origen a un gran movimiento de protesta. La pulsada discursiva fue claramente ganada por el gobierno, sin cuando algunos de los procesos de privatización fueron en ciertos casos conflictivos: baste recordar los conflictos relacionados con la privatización del servicio de trenes, la privatización de rutas nacionales (peajes), empleados telefónicos (dieciséis días de paro en septiembre de 1990), Aerolíneas Argentinas (varios gremios en el Movimiento de Trabajadores Argentinos, MTA), SOMISA (julio de 1991), YPF y YCF, entre 1990 y 1991. Esto puede leerse en el consenso que tuvo el proceso de reformas en la opinión pública. Así, hacia mediados de los 90 la privatización de todas las empresas del Estado ya se había concluido y, con menor o mayor resistencia, los sindicatos vinculados a ellas ya habían abandonado los reclamos respectivos.

Nuevamente, los conflictos resultaron altamente circunscriptos y ciertas estrategias de negociación particulares—que en muchos de esos casos incluyeron la propiedad coparticipada de acciones—permitieron resolverlos y evitaron que los despidos masivos, consecuencia de los procesos de racionalización de las empresas, implicaran mayores niveles de movilización y contestación. Al respecto, un caso paradigmático, que será analizado en el capítulo 3, es el de YPF.

Por último, completa este contexto la liberalización comercial—reducción arancelaria y paraarancelaria— que, formando parte del esquema económico impulsado por el gobierno, produjo una acelerada transformación de la estructura económica del país confirmando—como ya lo hemos mencionado—la salida del mo-

9. Hacemos mención a la variable político-ideológica pues resulta fundamental para analizar estos procesos de confrontación. Para el caso de los empleados públicos nacionales, la división entre un sindicalismo que decidió priorizar su pertenencia al conglomerado peronista y adecuarse a las transformaciones y otro que rompe con el peronismo y decide contestar los procesos de reforma, está representada por los alineamientos de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCIN) y ATE. Lo interesante aquí es que, como se ha señalado varias veces, los procesos de movilización no pueden y no deben comprenderse sólo a partir de una evaluación de transformaciones "objetivas" en la situación de determinados sujetos: desde 1991 la situación se vuelve desventajosa para el conjunto de los empleados públicos nacionales; sin embargo, sólo aquellos que están reunidos en el ala sindical enfrentada con el gobierno y escindida del peronismo son los que llevan adelante los procesos de movilización. Sólo la cúpula de los sindicatos se benefició con la estrategia de adaptación y, sin embargo, las bases respetaron la decisión de apoyar los procesos de reforma.

dolo de industrialización por sustitución de importaciones iniciado en la década del 70.¹⁰ Esa transformación tuvo sus efectos más visibles cuando el país comenzó a detener su crecimiento económico y los cambios en el contexto internacional frenaron la entrada de capitales que se había producido durante los primeros años de la década. En 1995, el cierre de empresas y los despidos producidos por el traspaso de las empresas públicas al sector privado se volvieron mensurables y disponibles para la opinión pública en un dramático índice de desocupación del 18,5 por ciento.

Una vez más, aunque por motivos diferentes, el punto central para comprender los procesos de movilización no se vincula en este caso directamente con una dimensión objetiva en la que se producen los fenómenos de transformación económica sino a partir de las múltiples formas en que esos procesos son experimentados en distintas situaciones. En este sentido, la desindustrialización y las privatizaciones fueron procesadas de manera variada y en tiempos distintos en las diversas regiones del país.¹¹ Es decir, la desestructuración de la economía de algunas regiones del país no condujo directamente a la movilización. Muy por el contrario—varios estudios así lo señalaban—, el aumento del desempleo, por ejemplo, parecía procesarse más en términos individuales que colectivos.¹²

En ese contexto, en los primeros años de la década se producen en el interior del país algunos estallidos sociales. Como fuera analizado oportunamente, esos acontecimientos presentaban algunas características comunes: a) los actores de este tipo de episodios son asalariados del sector público (provincial y municipal) apoyados por importantes sectores de la población; b) sus demandas se orientan a la defensa del empleo y el salario y rechazan las medidas de ajuste de las administraciones provinciales; c) el modo de expresión es la movilización y concentración callejeras, acompañadas con actos violentos contra símbolos propios de la vida política (por ejemplo, saqueo e incendio de edificios públicos) y, frecuentemente, con ataques y saqueos a los domicilios particulares de los políticos; d) su alcance es espacialmente localizado (se circunscribe a las capitales y a algunas ciudades importantes del estado provincial) y temporalmente episódico: no implica ni deriva en movimientos políticos estables con objetivos e identidad propios, y e) el destinatario es el gobierno provincial y la clase política local y, por último, logran un alto nivel de impacto en el sistema político, ocasionando crisis de importancia (por ejemplo, renuncia de gobernadores e intervenciones federales).¹³

10. Habría que agregar aquí la eliminación de los regímenes de promoción industrial (Gerchunoff y Torre, 1996). Entre 1990 y 1998, las importaciones aumentaron ocho veces mientras que la producción industrial lo hizo en 25 por ciento (Aronskind, 2001).

11. En parte, este tipo de interpretación se encuentra señalada en la sugerente propuesta de Javier Auyero (2002a) de mirar la retirada del Estado y el hiperdesempleo "desde abajo".

12. Nos remitimos a dos tipos de análisis en particular: el de Gabriel Kessler (1996) referido a la percepción del desempleo como una "epidemia", y el de Soldano (1997) sobre la persistencia de la categoría "trabajador" como modelo de identificación—y por ende el efecto estigmatizador del desempleo—, así como su percepción en términos de una situación individual y transitoria.

13. Como dijimos, el acontecimiento más importante y de mayor repercusión es el de Santiago del Estero en diciembre de 1993. También pueden incluirse los casos de Jujuy (varios conflictos

Esos episodios se produjeron, como lo mencionamos antes, sobre el trasfondo de movilizaciones sindicales que, además, muchas veces resultaban de una gran intensidad y con un alto nivel de confrontación con las policías provinciales. Los estallidos tenían un rasgo fundamental —su anclaje comunitario— que estará presente en el primer gran corte de ruta llevado adelante en Cutral-Co y Plaza Huincul en junio de 1996. Los cortes no se iniciaron en ese momento sino que habían comenzado a principios de la década, cuando constituyeron un recurso desocupado al que echaron mano minoritarios grupos de ex empleados de algunas empresas públicas para evitar los procesos de privatización y los despidos. Ese origen histórico y simbólico es central para comprender en toda su dimensión la carga “dramática” que el formato propone. Quienes organizan los bloqueos no tienen por recurso, para cobrar visibilidad y abrir espacios de negociación, más que el propio cuerpo expuesto en las rutas (Pérez, 2001).

Los largos cortes de 1996 y 1997 en Neuquén y Salta tienen una importancia fundamental porque, en primer lugar, marcan el pasaje a la acción de nuevos actores constituidos en el interior del país, a saber, multisectoriales conformadas por sectores desigualmente afectados por la desestructuración de las economías locales. Los cortes de 1996 en Cutral-Co y Plaza Huincul y los de 1997 en Tartagal y Moscom (que no son los únicos pero sí los primeros) son verdaderos cortes comunitarios donde confluyen desocupados, comerciantes, pequeños empresarios, sindicatos y políticos locales.¹⁴ Ese carácter comunitario es el que, en segundo lugar, organiza la convergencia entre los cortes —los piquetes— y las puebladas que, herederas de los estallidos en las provincias, se producirán, primero, como respuesta a las represiones de los cortes y, luego, se constituirán progresivamente en horizontes potenciales de cada corte.¹⁵

Sin duda el encuentro entre diferentes sectores sociales, todos ellos afectados por un inédito proceso de descolectivización,¹⁶ frente a un Estado nacional en retirada, constituye el punto de partida de una experiencia unificadora, en medio del desarraigo social. Tanto el caso neuquino como el salteño tienen un interés particular, además, por el hecho de ser el producto de la desarticulación vertiginosa de una economía de enclave en donde el rol de YPF fue mayor. Puebladas y piquetes convergen, por primera vez, ahí donde la experiencia de la desocupación se expresa abruptamente en el más crudo y abierto desarraigo, afectando a trabajadores que contaban con carreras laborales estables, que en algunos casos incluían hasta tres generaciones.

entre 1990 y 1995), San Juan (julio de 1995), Córdoba (junio de 1995) y Río Negro (septiembre y octubre de 1995) (Farinetti, 1997: 40-41).

14. Un análisis detallado de estos cortes y puebladas es presentado en el capítulo 3.

15. Otros análisis dan prioridad, por el contrario, a las continuidades que se observan entre los distintos tipos de acontecimientos, por ejemplo entre “estallido”, “corte de ruta” y “pueblada”, como repertorios dentro de un ciclo de movilización (Auyero, 2002a).

16. Con el término descolectivización hacemos referencia a la pérdida de aquellos soportes colectivos que configuraban la identidad del sujeto (sobre todo, referidos al mundo del trabajo) y, por consiguiente, a la entrada a un período de “individualización” de lo social. Retomamos la noción de Castel (1995, 2000). Volveremos sobre el tema en el capítulo 4.

b) De las huelgas sindicales a los cortes piqueteros

El año 1997 es clave para entender la configuración del nuevo repertorio de protesta. El 24 de mayo, poco más de un mes después de que se desencadenara una brutal represión y una nueva pueblada en Cutral-Co y Plaza Huincul, diversos funcionarios provinciales de Salta, Jujuy y Córdoba (sumados a los de inteligencia e interior del gobierno nacional) mantenían febriles reuniones y elaboraban planes de contención para lo que parecía ser una reacción en cadena de cortes de ruta masivos.¹⁷

Los desocupados —ahora identificados como piqueteros— eran una presencia constante en las imágenes de los cortes que, sin embargo, representaban una preocupación mayor para el gobierno por estar motorizados por multisectoriales. Esos desocupados cortaban rutas, realizaban asambleas y dialogaban con comerciantes y pequeños empresarios que, en gran medida, eran los que llevaban adelante las negociaciones y finalmente los que usufructuaban buena parte de los resultados. Uno de los casos más disonantes es, en este sentido, el de Jujuy, donde el portavoz visible del movimiento provenía de los sectores sindicales movlizados, en este caso del Sindicato de Empleados Municipales de Jujuy —integrado a la CCO— que incesantemente había generado conflictos de alta intensidad en la provincia.¹⁸

En los meses siguientes, el conflicto se generalizará y se radicalizará extendiéndose a la mayor parte de las provincias argentinas hasta casi fin de año, aunque con menor intensidad luego de la huelga general (con cortes de ruta) realizada por el sindicalismo disidente en todo el país el 15 de agosto. Sin embargo, lo más interesante es seguir el recorrido de la cuestión piquetera en las semanas previas a la generalización de los conflictos en el interior del país.

Luego de treinta y cuatro días de durísimo conflicto entre los docentes y el gobernador de la provincia de Neuquén, en la localidad de Cutral-Co se decidió recurrir nuevamente a un recurso que hacía poco menos de un año había logrado atraer la atención de la política nacional, a la vez que había abierto nuevos espacios de negociación para diversos actores locales, silenciados y desaparecidos en medio de la crisis de la economía regional. Ni el gobernador neuquino ni el gobierno nacional estaban dispuestos a permitir que otro conflicto de proporciones confirmara que la intransigencia en las protestas desembocara en nuevas vías efectivas para plantear reclamos. Así, la primera de una larga serie de represiones “aleccionadoras” tendría lugar ese sábado 12 de abril, encabezada por un juez federal que, al encontrar una participación menos masiva en la ruta, decidió ordenar la represión.

El problema para la Gendarmería y la policía provincial que intentaron poner en caja a los manifestantes fue que se encontraron con que la gente de los barrios de Cutral-Co (especialmente de los más pobres) salió a enfrentar la represión, en

17. Es particularmente ilustrativa la crónica “Jujuy: más calma pero sin acuerdo”, en *La Nación*, 24 de mayo de 1997.

18. La historia de la provincia de Jujuy durante los 90 merece una especial atención. Puede consultarse Santillán (1998). Véase también Rodríguez Blanco (2002).

ciento en la zona), en contraste con la opulencia de las empresas transnacionales que se habían quedado con el negocio del petróleo. Por otro, comenzaba a tematizarse la "calidad" de las administraciones provinciales que habían permitido tamaños procesos de deterioro económico y social.²⁶

La comparación con el caso neuquino fue inmediata, hecho que permitió argumentar que no se trataba de un caso aislado sino más bien de las consecuencias de las privatizaciones y del aislamiento y la desestructuración resultantes; la base de la crítica que comenzaría a consolidarse contra el modelo económico.²⁷ En Tartagal y Mosconi, en 1997, la misma imagen de los ex empleados de YPF forzados a salir a la ruta luego de la retirada del Estado aparecía como complemento de la figura de los jóvenes que había dejado la segunda pueblada en Cutral-Co, y que representaban más plausiblemente a los "subversivos" evocados por el discurso gubernamental. Al mismo tiempo, la importancia de ese corte consiste en que consolidaba la idea de que otra identidad —y otro destino— era posible para quienes habían perdido su trabajo y habían visto interrumpida su carrera laboral. El nombre "piquetero", además de atraer la atención —de los medios y del sistema político— por su fuerza expresiva, como lo describimos antes, representaba una alternativa para aquellos para los cuales una definición, como la de desocupados, nos resultaba intolerable. Especialmente para quienes habían sido —y aún se consideraban— trabajadores, la posibilidad de nombrarse "piqueteros" tuvo un poder desestigmatizador que facilitó la inclusión de esos sectores en las organizaciones. Así, un nuevo motivo de dignidad —que entonces reemplazara la pérdida dignidad del trabajo— podía comenzar a buscarse explorando y explotando la categoría "piquetero", entendiéndose así finalmente aquella de "desocupado".

El 16 de mayo, un día después de que se levantara el corte en el norte de Salta, la atención comenzó a centrarse en algunas localidades petroleras y mineras donde se registraban cortes, como en Río Turbio (Santa Cruz), o en localidades donde la privatización de alguna empresa del Estado había desestructurado la actividad económica local, como en Sierra Grande (Río Negro). A su vez, múltiples cortes y amenazas de corte se hacían públicos en distintas provincias del país. Los pronunciamientos más ciertos eran los de la CGT de San Lorenzo (escindida de la CGT oficial), en Santa Fe, y el de una nueva multisectorial en Cruz del Eje (Córdoba); ambos sectores habían decidido poner fecha a sendos cortes de ruta. Por otro lado, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mendoza y el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut esgrimían públicamente amenazas de cortes y movilizaciones para volver a su favor los procesos de negociaciones en los que se encontraban embarcados. En todas las provincias en las que había conflictos —especialmente conflictos gremiales— se discutió la posibilidad de echar mano del corte de ruta. En algunos casos, como en Formosa o en San Juan, la medida parecía toda-

26. El propio gobierno nacional —con la intención de desvincularse de la situación— fue receptivo a esta caracterización del conflicto. Véase "Malestar de Menem con gobiernos provinciales. Entiende que las crisis se deben a malas administraciones; enojo con empresarios", en *La Nación*, 16 de mayo de 1997.

27. "Como en Cutral-Co, Neuquén —donde también hubo una pueblada—, Tartagal es un pueblo de desocupados: la privatización de YPF y el cierre del ferrocarril terminaron con las fuentes de trabajo", en *Clarín* ("Salta: sigue cortada la ruta 34"), 9 de mayo de 1997.

vía demasiado drástica para sostener conflictos que, además, comenzaban a desbarbarse. En Jujuy, por el contrario, el sindicalismo disidente (representado por la CGC y la CTA) realizó su propia evaluación de la situación y decidió convocar a un paro y movilización para la semana siguiente, intentando que la espiral de conflictos no se desactivara.

Quizá como respuesta al carácter gremial de la convocatoria, el gobierno de la provincia de Jujuy, a cargo del justicialista Carlos Ferraro, decidió reprimir para despejar un corte realizado en la ruta 34 a la altura de la localidad de Libertador General San Martín. Allí, una nueva pueblada frenó el accionar de Gendarmería y volvió a presentar el panorama de una población altamente movilizada y decidida a enfrentar la represión y a hacer oír sus reclamos. Allí no se encontraban los principales referentes de los gremios opositores (aunque sí varios de sus militantes), sino que el corte había sido liderado por una multisectorial (en la que se encontraba representado el Centro de Desocupados del Ingenio Ledesma).²⁸ Luego de tres días de enfrentamientos, el gobernador jujeño finalmente ordenó la retirada de Gendarmería, al tiempo que logró que los piqueteros aceptaran una cantidad de planes asistenciales que cuadruplicaba su oferta inicial. Ese ofrecimiento se sustentaba en una decisión del gobierno nacional —hecha pública— de destinar 600 millones de pesos a la creación de 100 mil nuevos subsidios (planes Trabajar) para hacer frente a los reclamos surgidos de los cortes. Esa decisión, apurada por la multiplicación de cortes en todo el país e incluso por la repercusión internacional que éstos habían alcanzado, mostraba que la única forma de lograr el levantamiento de estas medidas era distribuir subsidios. En segundo término, el gobierno también decidió comenzar a enviar negociadores directos a los lugares de conflicto, a fin de apuntalar la figura de los gobernadores, que se veían forzados a encarar personalmente las negociaciones.

Aun cuando se habían avanzado las negociaciones, los piqueteros de General San Martín no levantaron el corte. Por el contrario, frente a la noticia del éxito de las negociaciones, los pobladores de los municipios de San Pedro y de Palpalá decidieron iniciar sus propios cortes. Frente a ese panorama —que suponía responder a la demanda de unos 14 mil planes en total— el gobernador decidió separarse del conflicto y convocar a autoridades nacionales y al juez federal de turno.²⁹ Las propias autoridades gubernamentales reconocían que los cortes suponían un problema difícil de afrontar pues los grupos que cortaban las rutas eran sumamente heterogéneos y no tenían interlocutores claros, al tiempo que —como ya lo dijimos— los intentos de represión se mostraban infructuosos.

Desde el 26 de mayo y durante seis días se abrieron intensos procesos de negociación que terminaron con el levantamiento de los veintidós cortes que habían llegado a paralizar la provincia de Jujuy. Un primer dato importante al respecto es que el único actor con capacidad para lograr que se iniciaran las negociaciones fue

28. Una de las crónicas hace hincapié en que quienes habían realizado el corte habían sido los "zaferros" del ingenio, reclamando trabajo. Véase "Represión y sesenta heridos en Jujuy por otro corte de ruta", en *Clarín*, 21 de mayo de 1997.

29. Al secretario de Seguridad —presente en la zona— se le sumaron los ministros de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Véase "Palpalá recalienta el conflicto social en Jujuy", en *La Nación*, 25 de mayo de 1997.

la Iglesia.³⁰ En segundo lugar, esas negociaciones pueden ser consideradas un pequeño cabal de la heterogeneidad de actores que, instalados de un lado y de otro del piquete, intentaban fijar las condiciones para su levantamiento. En el caso jujeño, por ejemplo, sobre las demandas básicas de planes, irrenunciables para quienes se movilizaban en las rutas, se agregaron los planes de obra pública – que son en una manera adicional de conseguir recursos para los municipios –, el pedido de renuncia del gobernador –impulsado por el Frente de Gremios Retatales– y hasta la condonación de la deuda pública provincial –reclamada por el propio gobernador de Jujuy–.

En la compleja distinción de fracciones que ejemplifica el caso jujeño, sin embargo, un hecho resulta sumamente importante: en medio de las demandas cruzadas emergió un interlocutor político de los cortes que fue precisamente el Frente de Gremios Retatales (integrado por sindicatos de la CCC y la CTA) y una figura que mostraba liderazgo, al menos por el caso jujeño, el Perro Santillán. Esto contrasta con la multitud de dirigentes locales que habían surgido en los diferentes cortes y que habían sido literalmente absorbidos por la política local o la provincial. El segundo punto es que con los 12.679 planes que el gobierno finalmente comprometió para lograr el levantamiento de los cortes, éstos se consolidaban como el eje principal –aunque no exclusivo– que sintetizaría la demanda por trabajo y su justificación en relación con la crisis de las economías locales. Por último, el caso jujeño –cruzado transversalmente por una larga historia de confrontación con las autoridades políticas provinciales– contribuyó a reafirmar una tendencia (que se mostraría con mayor claridad años más tarde) a trasladar la administración de planes de los municipios a las organizaciones sociales y políticas. Este movimiento produjo efectos sumamente novedosos y complejos, ilustrados por el caso de algunas organizaciones piqueteras que llegaron a controlar más planes sociales que los municipios, al tiempo que gozaban de una mayor legitimidad.

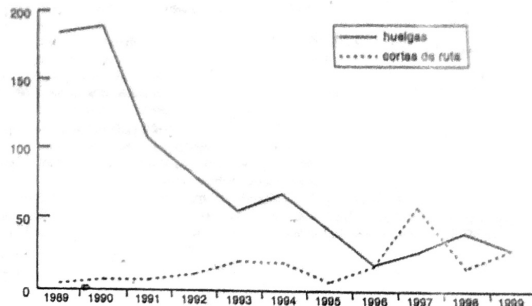
Esta primera ola de movilización –que analizamos someramente– tiene la importancia histórica de la presentación pública de la cuestión piquetera. En primer lugar, como hemos visto, entre los cortes y puebladas de 1996 y 1997, un nombre hizo su aparición dando lugar a múltiples y masivos procesos de identificación que cristalizarían, años más tarde, en la conformación de varias organizaciones piqueteras en escala nacional. En segundo lugar, una configuración de ciertas demandas comienza a articularse en torno de la cuestión piquetera. Esa configuración es tanto subsidiaria de una tematización de los resultados de las reformas económicas y políticas implementadas en el país –el modelo económico– como del establecimiento de un mecanismo de negociación organizado alrededor de la distribución masiva de planes asistenciales. En este punto, es necesario señalar que

30. El papel o los papeles representados por la Iglesia en los conflictos requiere ciertamente un análisis particular que escapa al objetivo de estas páginas. Baste mencionar que existieron diversas posiciones que a su vez fueron variando con el tiempo. El clero argentino participó tanto de las instancias de organización de desocupados –donde Jujuy representa también un caso importante– como de las denuncias de activismo. Entre uno y otro extremo, la mayor parte de las autoridades eclesiales provinciales tuvieron un rol importante como mediadoras en los conflictos, es decir, como interlocutores de los gobiernos –provinciales y nacional– para llevar la oferta a los piquetes.

en el origen de esa tematización se encuentra el carácter fuertemente expresivo³¹ de los casos paradigmáticos con los cuales se presentó la desestructuración económica en el interior del país, es decir, las crisis de Central-Ca-Pizza Humani y Taltalagui-Mosconi.

Por último, asociado a la identidad piquetera y a una nueva formulación de las demandas por trabajo, en estos agitados años se consolidó el corte de ruta como nuevo formato de protesta legítimo. Esta consolidación tiene que ver no sólo con el volumen relativo del formato en relación con otros, lo cual de por sí muestra transformaciones importantes, sino también con el progresivo carácter modular del mismo. El hecho de que los cortes reemplacen a las huelgas como formato principal de protesta ligada al mundo del trabajo entre 1990 y 2000 (ver gráfico 1) no sólo se vincula con un repliegue sindical –que por cierto se produjo– sino también con que los sectores sindicales que continuaron movilizándose en la segunda mitad de los 90 encontrarían mayor eficacia y respuesta en el uso del nuevo formato.

Gráfico N° 1
Huelgas y cortes de ruta en Argentina: 1989 y 1999



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto UBACyT S061, "La transformación de la protesta social en Argentina 1989-1999".

Nota: Se trata de datos surgidos de un relevamiento de protestas en medios gráficos nacionales.

31. *Expresivo* no alude simplemente a la capacidad de mostrar o hacer visible una realidad oculta sino, más bien, un tipo –al que hemos presentado– de articulación, de puesta en forma de los distintos elementos que finalmente terminaron por conformar una "cuestión piquetera".

La difusión del formato no sólo se vincula con sus orígenes sino también —especialmente entre 1998 y 1999— con cuestiones más coyunturales. Hacia mediados de 1997, una importante fractura sindical lleva a la polarización y produce que los gremios congregados en el MTA formen parte del conjunto de actores que promueve y realiza cortes de ruta en el país. En el medio de esa fractura —que, a decir verdad, se vuelve enfrentamiento cuando el gobierno acuerda con la CGT oficial un nuevo programa de flexibilización laboral— también se produce una creciente tensión en la interna del Partido Justicialista, a causa del inicio del proceso de sucesión del menemismo para 1999. Es claro, en este sentido, el distanciamiento progresivo que el duhaldismo mostrará respecto de Menem y de las políticas gubernamentales. Uno de esos espacios de diferenciación que se vuelve prioritario es precisamente el del modelo económico. Ese distanciamiento va a producir constantes alineamientos y realineamientos en los gobernadores provinciales justicialistas, quienes deben ir decidiendo su posición en la interna.

Otro dato que agrega complejidad a la coyuntura es que, durante 1997, tomará forma un frente de oposición al menemismo. Ello se produce a partir de la convergencia entre los sectores sindicales disidentes (al menos claramente la CTA) y la entonces flamante coalición de partidos de oposición denominada *Alianza*. El surgimiento de este espacio permitirá que varios de los conflictos comiencen a canalizarse a partir de la nueva coalición política que suscitara expectativas de recambio, hasta que finalmente se llegue a la alternancia en 1999.

En este contexto, con los lazos de integración política del Partido Justicialista resquebrajados y en medio de una crisis económica desatada en 1995, los cortes van a representar cada vez más un importante mecanismo para reafirmar identidades, para confrontar, para abrir negociaciones, para dirimir espacios o alineamientos políticos o como forma de lograr recursos rápidos para paliar situaciones cada vez más angustiantes de hambre y padecimiento y para reorganizar la política local golpeada también por la crisis económica.

Parte II

El eje territorial del movimiento piquetero: el surgimiento de las organizaciones

a) Las primeras movilizaciones en el conurbano bonaerense

La nueva fábrica es el barrio.

Consigna de la CTA

A diferencia de las movilizaciones que se producen en aquellas localidades o regiones afectadas por el proceso de privatización de las empresas del Estado y la descentralización administrativa, las acciones de protesta que se llevan a cabo en el conurbano bonaerense, en Rosario o en Mar del Plata, reenvían a un proceso económico y social de más largo plazo, ligado tanto a la desindustrialización como al deterioro creciente de las condiciones de vida de las clases populares y las clases me-

dias-bajas que arrancó a mediados de los 70. Este proceso de desindustrialización afectó a una parte importante del sector asalariado y cuentapropista. Como consigna los datos para el Gran Buenos Aires, entre 1980 y 1990 la desocupación aumentó de 2,3 a 6 por ciento, mientras que la subocupación se duplicó, pasando de 4,5 a 11,4 por ciento de la población económicamente activa. Asimismo, mientras las pequeñas y medianas empresas expandían su ocupación en más de 25 por ciento, las grandes empresas la redujeron en 8 por ciento. En fin, el empleo informal —que era de 42,1 por ciento en 1980— pasó a 48,5 por ciento en 1991, y terminó por adquirir las características de "refugio" similares a las de otros países latinoamericanos.

Este proceso de pauperización de las clases populares aparece ilustrado por las tomas ilegales de tierras, que se desarrollan desde fines de la dictadura militar y durante los primeros años del gobierno de Alfonsín. En muchos casos, estas tomas, que dieron origen a asentamientos situados en los márgenes del ejido urbano de las grandes ciudades del país, fueron el producto de movilizaciones cuidadosamente planificadas, que contaron con el apoyo y la intervención de actores externos, entre ellos, comunidades eclesiales de base y organizaciones de derechos humanos. Ahora bien, como sostiene Merklen (2001), los asentamientos expresan la emergencia de una nueva configuración social que señala el proceso de inscripción territorial de las clases populares. Una de las primeras consecuencias de esta inscripción territorial es que el barrio aparece como el espacio natural de acción y organización; se convierte en el lugar de interacción entre diferentes actores y organizaciones de base, comunidades eclesiales y, cuando es el caso, de organizaciones no gubernamentales. De esta manera, como saltará a la vista en los años sucesivos, en la medida en que se agraven las condiciones de vida de las clases populares, y se acentúe la distancia con el mundo del trabajo formal, la militancia territorial va a revestirse de nuevas dimensiones. Las organizaciones de desocupados que van a ilustrar cabalmente el modelo "territorial" son la FTV, la CCC, el MTR y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, en un haz por demás heterogéneo que reúne juntas vecinales, sociedades de fomento y activistas, provenientes de diferentes horizontes políticos.³²

Así, en determinadas zonas del conurbano bonaerense y a diferencia del asentamiento que expresa la convergencia entre "piquetes" y "puebladas", la experiencia de las organizaciones de desocupados se inscribe en un modelo de acción territorial que, en algunos casos, remite a una historia previa, ligada a la lucha por la propiedad de la tierra y a la organización de la vida del barrio alrededor de los servicios básicos (calles, agua, energía eléctrica, la sala de salud, entre otros). Pese a ello, es necesario señalar el carácter disperso y puntual de las acciones llevadas a cabo por las incipientes organizaciones de desocupados, así como la relativa asincronía que existe entre algunas de ellas, especialmente entre la FTV y el resto de las corrientes.

Entre 1991 y 1997, en la medida en que el paisaje urbano pierde sus rasgos tradicionales hasta convertirse en un verdadero cementerio de industrias,³³ la poli-

32. También encontramos unos pocos dirigentes territoriales ligados a estructuras políticas partidarias (Partido Comunista y Partido Obrero).

33. Uno de los indicadores es la pronunciada caída del empleo asalariado que se produjo entre 1991 y 1997 en el área metropolitana de Buenos Aires registrada, en donde a mediados de los 90 se concentraba más de la mitad de las firmas industriales (Cortés y Marshall, 1999).

tica en los barrios tiende a recluirse en su dimensión más reivindicativa, despojándose de sus lazos tanto con la militancia política como respecto del mundo sindical. Las razones de tal inflexión son variadas y complejas: el telón de fondo es, sin duda, el triunfo del peronismo en su versión neoliberal. Sin embargo, hechos como el intento de copamiento de La Tablada en 1989 por parte de una fracción del Movimiento Todos por la Patria conllevaron consecuencias desastrosas en la dinámica interna de los barrios. El temor a las represalias, luego de la represión sangrienta y de los fusilamientos secretos, avalados por un gobierno democrático debilitado y en retirada, a lo que hay que agregar el desengaño natural y la consternación lógica por parte de militantes que nada sabían del aventurerismo revolucionario de Enrique Gorriarán Merlo, provocó una suerte de "corrida" y de repliegue de los militantes sociales de izquierda en los barrios.³⁴ Además, la crisis hiperinflacionaria, que desembocó en los primeros saqueos generalizados a comercios y supermercados, abrió importantes grietas en el tejido social comunitario. A esto se le sumaría el pronto abandono que el sindicalismo peronista haría de sus propias bases sociales, cada vez más afectadas por los licenciamientos masivos.

Así, los años de oro del menemismo muestran a los barrios recluidos en la cuestión más reivindicativa, abandonados por los sindicatos y con la estructura puntieril peronista en plena expansión, sin mayores competencias a la vista. No fueron pocos los militantes sociales y políticos que recordarían el período como una suerte de lenta travesía por el desierto, en medio de un espacio social que mostraba a una población ya pobre, pero cada vez más pauperizada, suspendida entre la culpabilización individual y el temor a perder el empleo.

Con la puesta en marcha del programa de privatizaciones, entre 1990 y 1995, algunos barrios comenzaron a organizarse para reclamar por las tarifas de los servicios públicos privatizados. Una primera comisión de desocupados surge a fines de 1995 en La Matanza, en la cual participan el Frepaso, la Central de Trabajadores Argentinos, el Partido Obrero y el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP-Partido Comunista Revolucionario (PCR). Sin embargo, no es hasta 1996 que arrancan las primeras movilizaciones en demanda de ayuda alimentaria. Así, las primeras formas de protesta empleadas van a ser la olla popular y las marchas. La ola de movilizaciones se inicia poco antes de la primera pueblada en Cutral-Co, en mayo de 1996, cuando los vecinos de los barrios María Elena y Villa Unión de La Matanza realizan una olla popular en la plaza de San Justo con una importante participación de mujeres. La olla popular, que se mantuvo hasta el 24 de mayo, fue uno de los primeros lugares de encuentro de varias movilizaciones opositoras. En esa oportunidad, con la intermediación de la dirigente de CTERA Mary Sánchez, una delegación encabezada por Juan Carlos Alderete, presidente de la Junta vecinal del barrio María Elena, negoció directamente la ayuda alimentaria con el intendente Alberto Pierri. El hecho marcó también el punto de partida de un debate acerca de cuáles debían ser las orientaciones estratégicas que organizarían los reclamos al gobierno.

34. Las consecuencias que tuvieron los hechos de La Tablada en la desarticulación de un proyecto de izquierda con verdadera militancia social no han sido suficientemente analizadas. No es casual que luego de la experiencia del MTP, los proyectos de izquierda y de centro-izquierda postularan otro tipo de construcción del lazo político, ajeno al desarrollo de estructuras de base.

Poco después, el 6 de septiembre de 1996 se realiza una importante "marcha contra el hambre, la represión y la desocupación" hasta Plaza de Mayo, que reunió a unas dos mil personas, en la cual confluyeron dos columnas: una, de La Matanza, encabezada por "Toty" Flores, del barrio La Juanita, y la otra, procedente del sur del conurbano, que reunió a quienes serían luego conocidos referentes del movimiento piquetero. La marcha fue el puntapié inicial para la creación de los primeros movimientos de trabajadores desocupados, con asiento en los diferentes barrios, algunos de los cuales iniciarán los primeros cortes de ruta durante 1997.

Por último, para la misma época, los barrios agrupados alrededor de la activa cooperativa El Tambo, cuna del dirigente Luis D'Elia, llevarán a cabo varias marchas al municipio de La Matanza en demanda de alimentos y ropa (a causa de las pérdidas producidas por inundaciones), así como contra los cortes de energía y las exorbitantes tarifas de los servicios públicos privatizados. Entre 1996 y 1997 se establecen también los primeros contactos con las comisiones de desocupados de los barrios Villa Unión y María Elena, así como se entablan relaciones informales con la CTA, que había recibido su reconocimiento como central sindical poco después del primer cutralazo. Sin embargo, como veremos más adelante, la experiencia del asentamiento El Tambo reconoce otra trayectoria, que le otorga un sello diferencial en relación con las otras organizaciones sociales.

b) Encuentros y desencuentros: debates y primeros marcos comunes de la experiencia piquetera

Quando yo quedé sin trabajo, en 1995, se notaba la desocupación. Entonces nos encontrábamos con los compañeros que habían quedado desocupados poquito tiempo antes que yo, que vivían en el barrio, que vivían en estado más para adentro, con mucha vergüenza de tener que decir que habían quedado desocupados, con mucha vergüenza cuando venían y les cortaban la luz porque no podían pagar. Bueno, ahí surgió la idea de hacer un reclamo político, y por eso es que en 1996 instalamos una olla popular en la plaza principal de La Matanza, estuvimos seis días, en esa olla popular, con alrededor de cuatrocientos compañeros. Ahí se comía, se desayunaba y fuimos con carpa a instalarnos, en lo cual ahí nosotros fuimos con una cabeza y volvimos con otra, porque fuimos a un hecho político y no nos dimos cuenta que todos esos compañeros que estaban bajoneados, y que han protagonizado esa lucha se sintieron otros, porque ahí se hacía bajar a los concejales, al intendente, a negociar a la misma olla que estaba en la plaza. Eso fue en el '96, y volvimos con otra cabeza. (Juan Carlos Alderete, referente de la CCC)

Y cuando aparece el movimiento de desocupados, comenzamos a discutir. Hasta que aparece una diferencia entre nosotros y compañeros que provenían, la mayoría de ellos, del trotskismo. Los compañeros planteaban que para poder organizar algo primero había que centrar la cuestión en la formación política y se entendía por formación política discutir en ese momento lo que pasaba en Bosnia, y no me acuerdo en qué otro lugar. Y no estábamos de acuerdo, creíamos que era importante que la clase obrera tuviera conciencia pero nos pareció que la conciencia tenía que arrancar desde la

... propia experiencia y que desde la propia experiencia, el, levantara hacia el otro plano. (Roberto Martino, referente del 1978)

Primero serán las marchas y las ollas populares, en reclamo de ayuda alimentaria, a las que seguirán luego los primeros cortes de ruta, en demanda de trabajo, efectuados ya bajo el impacto de los piquetes y puebladas que comienzan a registrarse en el interior del país. El caso es que estas formas de movilización son las que posibilitarán los primeros cruces y posteriores encuentros entre los actores movilizados en el oeste y el sur del conurbano bonaerense, con diferente grado de organización y trayectoria política, entre ellos redes comunitarias, como la que conduce el polifacético D'Elia; juntas vecinales, como la del barrio María Elena, de donde proviene Alderete (ex delegado sindical y militante social), que forma parte de las filas del PCR; o más sencillamente movilizaciones barriales convocadas por militantes territoriales de izquierda, como "Beto" Ibarra (Movimiento Territorial de Liberación, MTL), con una vasta historia asociada a los asentamientos de la zona sur, o Roberto Martino (MTR), militante del PRT durante los 70.

Las movilizaciones realizadas durante 1997 serán vestigios de los primeros debates acerca de cuáles deben ser las orientaciones estratégicas de las organizaciones. Así, ese mismo año se impulsa la creación de la primera comisión de desocupados, en Laferrère, partido de La Matanza, en la cual conviven diferentes tendencias políticas (CTA, Prepaço, Partido Obrero, PTP-PCR) (Oviedo, 2001). En esta época comienza a discutirse el tipo de organización que debían darse los desocupados, a saber, si éstos tenían que organizarse de manera independiente, apuntando luego a una convergencia con el sector de trabajadores ocupados, o si, por el contrario, debían articularse dentro de un movimiento multisectorial, que incluyera desde el principio a otros sectores afectados por el modelo neoliberal. Esta última será la estrategia que encararán la CTA y el PCR.

En este sentido, es necesario reconocer que la CTA se encuentra entre las primeras organizaciones que percibió la potencialidad organizativa de los desocupados. Esta opción estratégica se diferencia de la que presentan otros sectores como el PCR o el Partido Obrero, quienes tienen una visión organizativa más anclada en las representaciones del mundo industrial. En efecto, la CTA percibió tempranamente el proceso de inscripción territorial de las clases populares, como bien lo resume la consigna "La nueva fábrica es el barrio". No por casualidad encabezó las primeras tentativas organizativas de "sindicalizar" al sector, a través de encuentros y congresos de desocupados, primero en Neuquén, en 1996, poco antes de los hechos de Central-CO, y luego en La Matanza, en 1997.

Otro eje de debate reenviaba al tratamiento de la cuestión reivindicativa en función de la respuesta que comenzará a dar el gobierno, a saber, ayuda alimentaria y planes sociales. Tengamos en cuenta que uno de los cambios más relevantes en las formas de intervención del Estado indicaba ya una clara tendencia a la implementación de políticas sociales focalizadas. Así, mientras gran parte de la izquierda partidaria —esto es, el Partido Comunista y las diferentes versiones del trotskismo— denunciará, en nombre de un programa político estratégico, la trampa asistencialista que propone el Estado, rechazando que ésta pudiera constituirse en el principio de la organización, otros militantes sociales y políticos considerarán que dada la gravedad de la situación no sólo era necesario —y urgente— asumir la cuestión reivindicativa aun en los términos planteados por el gobierno, sino

que esta podía y debía convertirse en el punto de partida de una organización política diferente y finalmente, articularse con un plan de estrategias mayor. Así, en términos más coyunturales, pronto van a configurarse dos posiciones antagónicas: aquella que postulará como ámbito de organización el territorio y como punto de partida la cuestión "reivindicativa", a saber, por un lado, la atención de las demandas de alimentos de los vecinos (PTP, COC, MCR, MTL y CTA) (Anibal Varín) por otro lado, aquella que rechazará la ayuda alimentaria y los planes sociales, considerando la posición "asistencialista" de las organizaciones territoriales, y planteará como consigna estratégica la creación de un subsidio para los desocupados, de un monto superior a los 500 pesos (Partido Comunista, Partido Obrero, Movimiento Sin Tierra de los Trabajadores (MST)). Esta última posición puede ser ilustrada por las palabras del referente nacional del MTL, Beto Ibarra: "Nosotros tendimos una consigna que era trabajo garantido, no a los planes sociales, no al asistencialismo, no a las bolinas de comida. Durante toda una época nos morfó y nos redujimos en cantidad la treta de la lucha por la tierra reclamando trabajo garantido porque en ese tiempo, calculábamos, no queríamos ser comunistas sociales garantidos de cualquier gobierno que así se lo planteara". O en expresiones del referente del PTO, Otono, Néstor Piarola: "El aspecto de los planes asistenciales, nos veníamos al principio. Nosotros tendimos la estrategia del subsidio al desocupado, como lo seguimos teniendo. Y bueno, después, en una valoración política técnica, fuimos argumentando a lo largo por el plan de empleo como un paliativo y como un señuelo de lucha por más. Y así lo consideramos al día de hoy".

La organización encuentra, pues, su punto de arranque en la acción de algunos sectores de la izquierda. Así, por ejemplo, el núcleo matancero encabezado por militantes del PCR y peronistas trabajando juntos, embarcados en una firme vocación por promover la problemática del hambre y, más adelante, en una política de obtención de planes sociales. Al inicio de la primera olla popular realizada en mayo de 1996, y que terminó aglutinando veintiseis barrios, se sucedieron otras dos ollas populares, todas ellas marcadas por una creciente participación.³⁵

Por otro lado, en el sur del conurbano, la "marcha contra el hambre" (septiembre de 1996) va a impulsar la creación de los primeros movimientos de trabajadores desocupados, que comienzan a desarrollarse al calor de las discusiones en torno de la ayuda estatal. A lo largo de 1997 se realizará el primer corte en Mar del Plata, en junio, así como una serie de movilizaciones en Florencio Varela, que culminarán con el encaramiento de los primeros planes sociales. En junio de ese mismo año, estos grupos tomarán el nombre de MTD Teresa Rodríguez, en memoria de la neoquina caída en la segunda pueblada oustralquense. Poco después, en esta misma línea de acción se creará el MTD Solano-Teresa Rodríguez y el MTD de Hurlingham. Estos cuatro MTD convergen bajo la consigna "Trabajo, dignidad y cambio social". En fin, a principios de 1998, durante su tercer corte de ruta, el MTD de Varela sufre una primera represión, que termina con el encarcamiento de veintisiete personas durante más de una semana y con el retiro de los planes sociales.

35. El primer punto del programa de la olla de San Justo decía: "Alimentos para todos las familias de desocupados. Entrega semanal y distribución mediante asociaciones barriales vecinales, centros de fomento o cooperadoras" (Alderete y Gómez, 1999: 15).

Mientras tanto, el Partido Obrero realizaba un planteo estratégico excluyente, al considerar que la superación del problema de la desocupación sólo podría llevarse a cabo a través de la creación de trabajo genuino y del reparto de horas de trabajo. En esa misma línea, como dijimos, era favorable a la creación de un subsidio al desocupado, sin contraprestación alguna, pues sostenía que por debajo de la exigencia de una contraprestación laboral se escondía un intento por deprimir aún más el salario de la clase trabajadora ocupada, a través de la reducción de las condiciones de asistencia (seguridad social, jubilación) y la liquidación de los convenios colectivos. Así, pese a contar con algunas implantaciones territoriales (La Matanza, Avellaneda y rápidamente Tartagal, en Salta), no será sino a fines de 2000 cuando el Partido Obrero revisará esta posición, en vistas de la extensión y la significación adquirida por el movimiento piquetero.

En realidad, son muy pocos los que, habiendo manifestado al principio una fuerte oposición y crítica a la política asistencial del gobierno, se mantuvieron firmes en un proyecto de autogestión y organización, sin intervención alguna del Estado. El caso paradigmático continúa siendo el de Toty Flores, del MTD de La Juanita, ex militante del MAS, que en los primeros tiempos puso encabezar las movilizaciones más numerosas de La Matanza, hasta que su renuencia a aceptar la ayuda del Estado lo condenó al aislamiento. El caso de este dirigente territorial coincide, a no dudarlo, con el vertiginoso ascenso de la CCC, detrás del carismático Alderete.

Ahora bien, es necesario subrayar que todo este proceso de organización y movilización de las organizaciones territoriales fue acompañado de una dinámica de construcción identitaria específica y novedosa, que consistió en retomar no sólo un método de lucha (el piquete) sino parte de la simbología piquetera, que iba surgiendo al calor de las luchas de las ciudades petroleras. Este complejo movimiento de apropiación y resignificación simbólica va a definir ciertos clavajes fundamentales en la lucha piquetera que van desde el reclamo de la especificidad de una identidad piquetera y las referencias a las experiencias de gobierno paralelo, hasta el llamado a una línea insurreccional.

c) Modelos organizacionales y acción territorial

Victor De Gennaro suele decir que el barrio es la nueva fábrica y un compañero me dijo: "Che, ¿y los del sector rural?". Entonces redefinimos ese concepto el día de hoy y dijimos: "La comunidad es la nueva fábrica". (Luis D'Elía, FTV, La Matanza)

Hay que jugar tipo Holanda, en toda la cancha. Yo soy piquetero, fui concejal, soy diputado provincial y soy también dirigente sindical. (Luis D'Elía, FTV, La Matanza)

A diferencia del resto de las corrientes, la FTV reclama una identidad construida al calor de las luchas reivindicativas por la tierra y la vivienda. En este sentido, es poco lo que retoma de la tradición sindical y menos aún, aunque parezca paradójico, de la lucha piquetera llevada a cabo en las lejanas ciudades petroleras. Sin embargo, para dar cuenta de ello es necesario indagar en el legado organiza-

cional y el tipo de trabajo territorial desarrollado por el núcleo duro de la FTV, el asentamiento El Tambo, en La Matanza, bajo el liderazgo de D'Elía.

El Tambo nace en 1986 y es uno de los asentamientos más conocidos de La Matanza, vecino a Ciudad Evita.³⁶ Su historia conoce varias etapas; en primer lugar, durante el período fundacional, al igual que otros asentamientos de la zona, entre ellos El Privado y el 17 de Marzo, su acción lleva la marca de un proyecto "comunitario" en el que convergieron profesionales y militantes de diferentes organizaciones sociales (entre ellas de derechos humanos y comunidades eclesiales de base). La base social del asentamiento era heterogénea, pues había un sector importante de clases medias empobrecidas, aunque también, claro está, sectores populares tradicionalmente pobres. En sus primeros tiempos, el barrio desarrolló una doble orientación, tratando de asegurar, desde el frente interno, la reproducción de la vida material y la consolidación de la organización, al tiempo que, desde el frente externo, recurrió a la solidaridad y los recursos económicos de "aliados externos". Sin embargo, antes de convertirse en el núcleo duro de la poderosa FTV, El Tambo va a recorrer un largo camino, que da cuenta de su carácter excepcional, sobre todo si tenemos en cuenta que el contexto político e ideológico del período era de franca hostilidad para el desarrollo y la consolidación de todo tipo de organizaciones comunitarias, por fuera de las estructuras del Partido Justicialista.

Ya hemos consignado que, además de las consecuencias ligadas a la política de descentralización administrativa que se desarrolla a fines de los 80, y que da cuenta del creciente peso de los actores locales (municipios), hay que añadir las primeras medidas orientadas hacia la focalización de las políticas sociales. Los primeros signos de este viraje comienzan a manifestarse a partir de 1987, con la implementación de las primeras políticas sociales focalizadas, que colocarán como destinatario a los habitantes de los barrios, a través de las organizaciones comunitarias. El plan PAN (Programa Alimentario Nacional), lanzado en 1985, a saber, durante el gobierno de Alfonsín, es un ejemplo de ello. Sin embargo, estas nuevas estrategias de intervención social, que encuentran desarrollos más acabados en algunos municipios del conurbano bonaerense gobernados por el Partido Justicialista (Lomas de Zamora, Moreno), se consolidan en toda la provincia durante la gestión de Antonio Cafiero, para ser finalmente objeto de una implementación nacional a partir de la gestión de Menem (Merklen, 2001 y Prévot-Schapiro, 1993).

Ahora bien, estas nuevas estrategias de intervención, tendientes a la focalización y la descentralización, irán produciendo un nuevo entramado político en el cual se insertarán las organizaciones comunitarias, fuertemente dependientes de la ayuda del Estado. En este nuevo contexto, sobre todo con la llegada del menemismo al gobierno, no pocas organizaciones sociales terminarán por perder su original vocación por la autonomía, subsumidas o neutralizadas por las estructuras clientelares del Partido Justicialista. En realidad, durante los 90 sólo algunas organizaciones contarán con los instrumentos necesarios para insertarse dentro del nuevo campo político-social, tratando de preservar un espacio de relativa au-

36. Seguiremos muy de cerca el relato de Merklen (1991 y 2001) sobre la trayectoria del barrio El Tambo.

autónoma y una identidad propia. Uno de ellos es el asentamiento El Tambo que, conformado por D'Elia, se a desmembró en tipo de etnia organizada con los habitantes del poder público y los partidos políticos. En estos asentamientos una parte de partidos de departamentos indultados después del Estado (a) formando la comunidad de D'Elia se a aglutina a la integración de ciertos indígenas de economías de tipo de un sistema de tipo y por tanto social, organizando por los resultados entre las distintas organizaciones del Estado y los diferentes asentamientos.

Como bien señala Parra (2001), una mirada retrospectiva muestra que las organizaciones comunitarias que lograron sobrevivir en un contexto de hostilidad y precariedad de recursos - algunas de las 90- padecieron lesiones graves a que enfrentaron con las fundaciones y ONG, ya que pocas tendieron a articuladas en redes con las organizaciones comunitarias. En este sentido, se menciona también el surgimiento organizativo del cual se dejó la cooperativa El Tambo, pues entre 1985 y 1990 este líder un acelerado proceso de constitución de redes entre organizaciones de base, compuestas por juntas vecinales, jardines maternos, cooperativas, entre otros, con el propósito de lograr un mejor acceso a los recursos alimentarios que proporcionaba el Estado. Primero fue la llamada Red Alimentaria, luego la Red de Barrios y, por último, en 1998, la PTV, a instancias y con el apoyo de la CTA, que la lanzaría a la escena nacional. Resulta sugestivo que este proceso de constitución de redes haya avanzado con el cuestionamiento de los censos realizados por las manzanas en la implementación del Plan Vida. En efecto, en 1990, no conformes con la tarea de relevamiento realizada por las manzanas de Hilda "Chiche" Duhalde, la cooperativa El Tambo decidió realizar su propio censo (así fueron censadas 8 mil personas en ocho barrios diferentes), para preparar una distribución más ajustada a la necesidad de las vecinas. Pese a que al comienzo la iniciativa contó con la resistencia de las autoridades, luego de un censo realizado por personal de la provincia, el censo fue finalmente aceptado. Así, entre 1995 y 1998, los vecinos recibieron directamente diez toneladas de ayuda alimentaria todos los meses. Este primer logro llevó a la constitución de la llamada Red Alimentaria, pero en la medida en que se fueron sumando otros barrios alrededor, ésta tomó el nombre de Red de Barrios.³² En resumen, los márgenes de la "autonomía relativa" logrados por las organizaciones congregadas alrededor de El Tambo revelaron la combinación de tres factores clave: en primer lugar, una acción estratégica que tendía a explotar al máximo las divisiones intra e interpartidarias e interjurisdiccionales; en segundo lugar, un acelerado proceso de constitución de redes entre organizaciones de base, a su vez articuladas con ONG, que sentó las bases de la autonomía en la gestión de la ayuda social respecto de la red puntero y manzanera, ligada directamente al Partido Justicialista, en fin, un último factor, no menos importante, reenvió al fuerte liderazgo comunitario que encarna la persona de D'Elia desde los orígenes del asentamiento.

Hasta aquí la protohistoria de la PTV. Pues lo que había comenzado como un embrion de movimiento social urbano cobrará nuevas dimensiones, a partir de

32. Según el testimonio de un referente de la PTV del asentamiento Cabeza, la red comenzó articulando vecinales barrios.

1998, en la medida en que el problema del desempleo tomó proporciones críticas y se fue definiendo a partir de 1998/1999 como el problema de sobrevivencia social de la PTV, convirtiéndose en sobrevivencia como sector nacional.

En julio de 2000, durante 1997, se convocó a los vecinos y otros barrios de la Matanza para discutir una acción de protesta frente al Congreso, frente a la Cámara Municipal, y frente a la par de los sectores involucrados en la crisis. La protesta, que tuvo lugar el día y no estuvo sujeta a las condiciones de supervivencia, fue organizada básicamente en forma de un sector de personas habiendo sido la oportunidad para reunir los primeros militantes de los sectores y personas habiendo sido la oportunidad para reunir los primeros militantes de los sectores de los sectores.³³ Poco después, en julio del mismo año, surgieron la Iglesia del Sagrado Corazón, en La Matanza. La Iglesia tuvo como objetivo principal el primer "encuentro" con la que luego sería el núcleo de la PTV, que comenzó a sufrir un primer episodio de supervivencia, a través de un sector de personas que se había constituido con el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJUD). Poco después, en agosto, el barrio María Elena ostenta sus primeros militantes propios Barrios Honorarios, que dependían de la provincia.

Por su parte, la CCC nació en 1994 bajo el liderazgo del Puro Santillán, militante del PCR y entonces secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), en Jujuy. En 1998 marca un punto de inflexión importante, pues es el año en el que la CCC y el PCR definen una política de organización de los desocupados. En efecto, como consta en el programa general de la CCC, éste se propone la organización del movimiento obrero en sus tres "afiliaciones": los trabajadores ocupados, los jubilados y pensionados. En fin, los trabajadores desocupados. Durante 1998 se incorpora a la misma al Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJUP), creado en 1995 por Raúl Castilla, ex militante del MIA, uno de los primeros movimientos de las movilizaciones realizadas frente al Congreso de la Nación.³⁴ Por último, en 1998 nace el sector ligado a los trabajadores desocupados, hoy mayoritario en la CCC, cuyo núcleo se halla en el partido de La Matanza.

Finalmente, el eje manzanero daría el gran salto organizativo en 1999, año en el cual se formarían las corrientes más masivas del movimiento piquetero. En efecto, en enero de ese año se realizó el primer planario que contó con la participación de ocho barrios de La Matanza, aunque el planario nacional constituido de los desocupados de la Corriente Clasista y Combactiva tendrá lugar el 11 de abril. Por su parte, a instancias de la CTA, el 18 de julio de 1998 se conformará la PTV, como parte de una estrategia mayor de tratamiento de políticas sectoriales y proble-

33. Según testimonios de referentes de la PTV, fue en esa oportunidad cuando De Cossato se acercó a los vecinos y se iniciaron las relaciones laborales con la PTV. Sin embargo, según dirigentes de la PTV, ya en 1997 se realizó en El Tambo un primer encuentro con organizaciones sociales ligadas a la problemática de la tierra, la vivienda y el hábitat, en la que participaron más de trescientos delegados, algunos del interior del país.

34. En 2001, por desavenencias tanto personales como ideológicas, Castilla se retiró de la CCC y creó su propio movimiento, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJUD). Aunque debilitado, el sector ligado a jubilados y pensionados continúa existiendo en la CCC hasta la fecha original, esta es, MIJUP.

máticas específicas. Así, desde su creación, la FTV va a incluir una heterogeneidad de sectores y organizaciones de base, que abarca la problemática de pequeños productores y campesinos, de villas y asentamientos, ocupantes e inquilinos, deudores del Banco Hipotecario y del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) y los llamados "pueblos originarios".

De esta manera, la estrategia de construcción de la CTA ponía en claro la necesidad de establecer una línea de continuidad entre la tradición fomentista y cooperativista, con reivindicaciones de carácter sectorial, y el ascendente movimiento de desocupados, portador de una visión más disruptiva, asociada a la condición del desocupado como no-trabajador. Para la FTV-CTA es de esa doble experiencia de donde se nutren los marcos experienciales de la acción, más pensada desde la visión de un movimiento social reivindicativo que extiende su esfera de representación, tradicionalmente reservada al problema de la tierra y la vivienda, al incorporar en su plataforma de demandas los reclamos ligados a la problemática de la desocupación.

En fin, no es casual que la posibilidad de desarrollar poderosas organizaciones territoriales, en el marco de alineamientos sindicales, fuera posible a partir de 1996-1997, pues las puebladas y los piquetes de las ciudades del interior habían comenzado a sentar las bases para una definición positiva del trabajador desocupado, a través de la creación de un neologismo destinado a tener un uso generalizado dentro del lenguaje coloquial argentino: "piquetero".

Asimismo, es necesario insistir en qué medida las primeras definiciones marcarán a fuego no sólo el horizonte de las organizaciones sino más específicamente su estilo de intervención y su lógica de construcción política. Por un lado, las organizaciones de desocupados, más allá de sus actuales alineamientos políticos y sindicales, reconocen como fuente originaria el "trabajo territorial", asentado en un modelo de representación que algunos sintetizarán a través de la figura del "delegado de base" y otros del "dirigente comunitario" o simplemente "territorial". Por otro lado, aunque la militancia social o territorial conoció un cierto desarrollo durante los movilizaciones años 60 y 70 —sobre todo asociado al trabajo de "base" realizado por sacerdotes tercermundistas y militantes católicos de clase media—, ésta adoptará nuevos rasgos a partir de 1980. En efecto, a diferencia del movimiento villero de las décadas anteriores —vinculado tanto a las corrientes sindicales más radicalizadas como a ciertas ramas del movimiento justicialista—, el trabajo territorial tiende a adquirir una "autonomía relativa".

Sin embargo, allí donde encontramos grupos que han acumulado una mayor experiencia o legado organizacional, como es el caso de las fuerzas que encabeza D'Elia, se puede observar una cierta continuidad en la acción territorial o, más sencillamente, la transformación de un movimiento social urbano que extiende su plataforma de demandas a medida que amplía su esfera de representación. En cambio, allí donde las agrupaciones son más recientes, la organización territorial se irá forjando al calor de la adopción de las nuevas metodologías de acción, siempre con la mirada puesta en los levantamientos en el interior del país. Así, más que potenciar un legado organizacional, aquí la acción territorial tiende a afirmarse en la conquista del territorio tanto como en la búsqueda de nuevos horizontes políticos.

Por otro lado, el modelo de acción territorial emerge como la contracara de aquel encarnado por el dirigente sindical y político tradicional quienes, más tem-

prano que tarde, suelen aprovechar la mejora en términos de oportunidades de vida para dar el "salto" y abandonar el barrio del cual son originarios; al tiempo que se construye a distancia de aquel otro modelo que plantea una instalación "desde afuera", a partir de una militancia más política y/o universitaria, que está lejos de compartir las mismas condiciones de vida y circunstancias de los vecinos.⁴⁰ No es raro por ello que los "referentes" sean del barrio y vivan en el barrio. Además, salvo algunas excepciones y por encima de los orígenes sociales o de las tradiciones políticas, los referentes que reenvían al modelo territorial son trabajadores desocupados,⁴¹ como sucede con la FTV y la CCC, así como también con los referentes principales de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Anibal Verón y del MTR.⁴²

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la acción reivindicativa es siempre costosa y, por lo general, consume una buena parte de la energía de las agrupaciones.⁴³ No es raro que en el marco de una pauperización creciente de los sectores populares, la tarea reivindicativa devenga urgencia y, más aún, acción inmediata, visible en la centralidad que cobran el comedor, la salita de salud y la panadería comunitaria.

Este modelo territorial va a ser relativizado en la medida en que se generalice la intervención de otros actores políticos, sobre todo de partidos políticos de izquierda, pues éstos son en parte cuadros partidarios que asumen una identidad "piquetera" a través del trabajo territorial. Sin embargo, pese a que los "referentes" pertenecen al partido y gran parte de ellos son trabajadores ocupados (incluso ex estudiantes universitarios provenientes de las clases medias o medias-bajas), es necesario decir que todas las estructuras territoriales creen y se nutren en gran medida gracias a la incorporación de "cuadros" o "referentes" provenientes del peronismo tradicional, especialmente de punteros y manzaneras, algunos de ellos de larga trayectoria barrial. Y esto sucede indistintamente de que hablemos del Polo Obrero, la CCC o el MTR, entre las tantas agrupaciones que componen el abigarrado arco piquetero.

Por último, digamos que en la medida en que el movimiento crece y expande su plataforma de demandas, ningún modelo tiende a existir en estado puro, sea específicamente territorial o de origen exclusivamente político-partidario.

40. Expresiones de este tipo se encuentran a menudo en los referentes principales de la FTV y la CCC.

41. Un ejemplo paradigmático es el modelo de militancia de la CCC, donde la representación "de base" adquiere tal centralidad que uno de los requisitos es que los delegados de la CCC pertenecan a la vertiente a la cual aspiran a representar. Esto quiere decir que, a diferencia de otras corrientes, no se admite que ningún referente de la CCC de la rama de "desocupados" sea, por ejemplo, un trabajador ocupado.

42. Para algunos, el modelo se extiende a gran parte de las corrientes piqueteras, como lo expresa el siguiente testimonio: "Los compañeros de la Anibal Verón, del Teresa Rodríguez, del MTR, del Polo Obrero, esos compañeros se levantan, se acuestan, almuerzan, meriendan, cenan tal cual lo hacen los compañeros del barrio, funcionan exactamente igual" (Mesa Provincial de la FTV).

43. Más adelante (cap. 4), veremos cómo las distintas organizaciones han ido desarrollando diferentes acciones comunitarias a partir de la utilización de los planes sociales.

Parte III

Mundo popular y transformaciones del peronismo⁴⁴

La emergencia de las organizaciones piqueteras tiene como telón de fondo la crisis y el debilitamiento del peronismo en los sectores populares. Pero esta transformación no registró una secuencia única y, digamos de paso, está lejos de aparecer como un hecho irreversible. Así, durante el primer lustro de la década menemista, los cambios en el mundo popular se instalaron en el registro de la convivencia y de la complementariedad con la cultura peronista, y sólo a partir de 1996-1997 las formas de autoorganización de lo social van a insertarse en el registro de la confrontación y el conflicto con el peronismo. Aunque las razones de este salto organizacional son por demás complejas y variadas, y muchas de ellas ya han sido explicitadas, en este último apartado realizaremos un rodeo diferente sobre el tema, para internarnos, aunque sea brevemente, en el marco de las transformaciones más generales del mundo popular.

Durante décadas, y gracias a la extensión de la condición salarial, en la Argentina hubo una fuerte tendencia a leer las transformaciones de los sectores populares urbanos en sintonía con la historia de los sectores sindicales, y éstos, a su vez, a través de los avatares del peronismo. Sin embargo, desde mediados de los 70 esta articulación tan peculiar entre mundo popular y sindicatos peronistas comienza a deshacerse. Lo cierto es que a partir de los 80, como afirma Merklen (2001), las nuevas formas de autoorganización urbana y de acción colectiva que éstas fueron generando, ligadas a la lucha por la vivienda y los servicios básicos, configuraron un marco específico de acción y, a la vez, un entramado relacional propio, desvinculadas del mundo sindical.

En realidad, la Argentina de los años 90 presenta una imagen paradójica del país, escenario de la hegemonía política del Partido Justicialista y, al mismo tiempo, teatro de la mutación y de la nostalgia del peronismo en el mundo de los sectores populares. Es esta paradoja la que durante gran parte de los 90 impidió no sólo la desconexión total entre lo político y lo social, sino también su unívoca correspondencia. Por un lado, gracias a la existencia de esta cultura política común, el gobierno de Menem pudo legitimar un modelo económico cuyo núcleo central era la modernización excluyente. Por otro lado, aunque el debilitamiento del peronismo no se expresó de manera inmediata en términos de erosión electoral, su mutación devino, en fin, inevitable.

Así, la rápida renuncia de los sindicatos a asumir la defensa de sus afiliados, más aún, su completitud activa con la *Realpolitik* de los nuevos tiempos, no hizo más que agravar un doble proceso que ilustra las transformaciones sufridas por el mundo popular. Por un lado, los años 90 terminaron por confirmar la dislocación entre sectores populares y sectores sindicales, distancia que se fue acentuando en la medida en que se agravaron los problemas ligados al desempleo y la precariedad y, con ello, se profundizó la desvinculación con el mercado de trabajo formal.

44. En este apartado retomamos y actualizamos una reflexión iniciada en *La Plaza vacía. Las transformaciones del peronismo* (Martuccelli y Svampa, 1997), y en "Identidades astilladas. De la patria metalúrgica al heavy metal" (Svampa, ed., 2000).

Por otro lado, desde 1987, cuando Antonio Cafiero asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires, hasta el final del primer gobierno de Menem (1995), el Partido Justicialista multiplicó las formas de intervención más específicamente políticas en el mundo popular, que encontraron su culminación —y también su crisis— en el clientelismo afectivo de las manzanas de Hilda Duhalde.

Por "clientelismo afectivo" entendemos un tipo de relación que expresa la convergencia aleatoria entre la dimensión utilitaria de la política, generalmente reforzada por la omnipresencia de demandas dirigidas hacia las instituciones políticas, y la dimensión afectiva, manifiesta a través de diferentes modalidades de identificación con los líderes. Así, durante años el clientelismo afectivo caracterizó un determinado lazo político con los sectores más desprotegidos. Más aún, éste triunfó allí donde el peronismo fue debilitándose como marco de interpretación de la vida política y social, esto es, a partir del abandono de políticas públicas integradoras, reduciéndose cada vez más a un conjunto de eficacias simbólicas que invocan los orígenes familiares, la tradición local, las imágenes de la lealtad o, más simplemente, el recuerdo de que "los otros son peores".⁴⁵ En suma, el clientelismo afectivo fue una manera relativamente estable de definición del vínculo político "desde abajo" en el período pospopulista.

Así, si bien es cierto que el clientelismo afectivo, en sus diferentes formas y variantes actualizadas, constituye una de las dimensiones, quizá la más importante, de la presencia y la persistencia del peronismo en el mundo popular, no lo es menos que esto indica un debilitamiento y a la vez una gran transformación, acacia como resultado del abandono de las políticas sociales integradoras. Más simple, los contornos mismos del peronismo popular se han transformado. En rigor, la transformación del peronismo en los sectores populares encuentra dos grandes inflexiones: la primera, durante la etapa inicial del gobierno menemista (1989-1995), aparece asociada al debilitamiento del peronismo en términos socioculturales; la segunda arranca en 1996 y está directamente vinculada al desarrollo de formas de (auto)organización de lo social, por fuera y confrontadas con la estructura del partido peronista. Remite, por ello, a un cuestionamiento del peronismo en términos organizacionales-políticos.

La inflexión sociocultural aparece ilustrada por dos fenómenos mayores: la ruptura generacional y la difusión de culturas alternativas. El primer fenómeno reenvía a la dificultad de transmisión del peronismo en el marco familiar. En efecto, más allá de la socialización aún observable a nivel electoral, a mediados de los 90 se va diseñando un corte claro que tiene que ver tanto con el desapego creciente de los jóvenes hacia la política como con el hecho de que el peronismo deja de

45. Decíamos en un trabajo anterior: "El vínculo político oscila entre los dos extremos sin que en ningún momento uno de los dos logre, verdaderamente, separarse del otro. Al sinnúmero de prácticas clientelares y a la hipertrofia de las dimensiones instrumentales de la participación política se añaden las dimensiones afectivas, que remiten menos a una identidad peronista activa como estructura del sentir que a un conjunto de emociones y de lealtades históricas frente al único partido que ha hecho algo por nosotros.— El resultado es la transformación y crisis del peronismo en la experiencia de la villa, desde una estructura del sentir a una convergencia aleatoria de dimensiones instrumentales y afectivas, que bien puede denominarse como clientelismo afectivo" (Martuccelli y Svampa, 1997).

1987-1995
 Hilda Duhalde

ser, para ellos, el núcleo de una identidad social.⁴⁶ La dificultad de los mayores, casi siempre en explicar el peronismo a las jóvenes generaciones, a insistir en el vínculo esencial entre peronismo y cultura social, más allá de su expresión actual, el movimiento. Por otro lado, es en este período cuando, aun en medio del auto-reconocimiento de los adultos como jóvenes, se experimenta la sensación de que partes enteras de su universo, antes indiscutiblemente públicas y privadas, desaparecen en los jóvenes y nichos de su propia existencia vital. No se trata por ello que la experiencia de la desocupación incrementa, su primer reflejo en el lenguaje privado, atreviéndose por la culpa y las implicaciones puras a la dignidad personal. En suma, el conflicto intergeneracional no debe ocultarnos la profundidad del camino recorrido, a saber, el hecho de que en el tránsito de una generación a otra desaparecieron los marcos sociales y culturales que definían al mundo de los trabajadores urbanos.

La segunda brecha sociocultural es alimentada por las exigencias alternativas, hecho que se comprende mejor si tenemos en cuenta que durante mucho tiempo, la hegemonía del peronismo de los sectores populares se fundió por una suerte de homogeneización política-cultural, que implicaba la subordinación y hasta la deslegitimación de otras presencias y creencias populares. Sin embargo, durante los 60, el crecimiento de las religiones pentecostales y evangélicas cuestionó la ilusión de esta homogeneidad. Más aún, estas fueron manifestando nuevas formas de pregnancia significativa, en la medida en que el peronismo iba perdiendo la capacidad de ensamblar los significados populares de una sola cultura política.

Ahora bien, estos primeros respaldamientos del peronismo en el mundo popular, esas brechas que se fueron abriendo en el seno de una subcultura, nos hablan menos del final del mundo peronista que de su transformación y de su crisis; más aún, no hacen más que poner en acto la heterogeneidad del mundo popular. No obstante, la intersección de los más jóvenes, seducidos por las nuevas imágenes del consumo, ni la expansión de las religiones-movimiento, significaron un cuestionamiento mayor del peronismo en términos políticos. Los jóvenes, porque la postura ideológica y escéptica no encontraron una rápida traducción electoral ni siquiera en un nuevo lenguaje político. La misma sucede con el universo atiracado de las nuevas religiones, dato que, como señalamos algunos estudios (Semán, 2001), encierra una afinidad esencial entre el corpus ideológico de aquellas y los supuestos culturales de los grupos populares.⁴⁷ Asimismo, hasta el presente, la expansión de las nuevas religiones revela una suerte de paradoja: pues si las religiones-movimiento avanzaron como portadoras de la posibilidad de recomponer el lazo social como acto comunitario, frente a avances de una dinámica privatizadora y sin los límites consuetudinarios que garantizan para la subcultura social, no es menos cierto que estas distribuyeron una determinada manera de transformación de lo comunitario, una resignificación realizada desde la esfera privada y, por tanto, despojada de una dimensión específicamente política. En otras palabras, esta nueva resignificación del lazo social desde lo privado no entraba en contradicción con las

preocupaciones políticas del peronismo. Estas podían convivir y, más aún, articularse con la cultura política peronista.

Ahora bien, no sucedió lo mismo respecto del segundo tipo de inflación, que desentendó claramente a la esfera cultural y religiosa, para insertarse en el registro organizacional-político. Esta se dio sin duda, y más aún, en confrontación de las organizaciones piqueteras, definidas por fuera y, más aún, en confrontación con las estructuras tradicionales del Partido Justicialista. En realidad, la deflación de los sindicatos ligados al Partido Justicialista produjo una gran desorientación de los sujetos sociales, algunos de ellos desgarrados por los dilemas planteados por la defenestración peronista (la lealtad, la voz o la salida); otros, la gran mayoría, sometidos a la dura tarea de preservar los marcos sociales y familiares que sustentan una cierta "rutina" o "normalidad" cotidiana. No fueron pocos los que se enfrentaron abandonados, literalmente por sus sindicatos a la hora de afrontar el desmantelamiento —muchas veces abrupto— del modelo de relaciones sociales (aumento de la precariedad, entrada y salida del mercado de trabajo, o desocupación plena, sin más). Como hemos dicho, el inicio del proceso de desactivación estuvo marcado por un repliegue en el lenguaje privado y un llamado a la subjetividad que, en el caso de muchos, se fundió en un cúmulo de sentimientos negativos, como la culpa, la impotencia y el desarrigo; todos ellos vividos a contramano del clima de euforia pentecostal que atravesaba otros sectores de la sociedad argentina.

Desde esta perspectiva, no había posibilidad de recomposición —esto es, de redefinición positiva— de la situación. La experiencia de la desocupación no podía conducir sino en la pasividad, la reclusión, la vergüenza, la autoculpabilización. Esta redefinición activa del nuevo contexto provino tanto de los activistas y ex delegados sindicales que encabezaron las marchas como de las mujeres, esposas o jefas de hogar, quienes a partir de su implicación masiva en manifestaciones y corteos de esta naturaleza las demandas de trabajo y ayuda alimentaria en un nuevo lugar, al tiempo que emprendieron una labor activa de reconstrucción de la cotidianidad.

Así, a partir de 1998-1999 el territorio del conurbano bonaerense va a convertirse en el escenario de una confrontación, de una lucha "cuerpo a cuerpo" entre las incipientes organizaciones de desocupados (sobre todo, los grupos autónomos, independientes de cualquier soporte partidario o sindical) y la estructura punteril del Partido Justicialista. Pero, como veremos en el próximo capítulo, el panorama no es fácil de resumir en una sola imagen, pues la breve historia del movimiento piquetero y sus relaciones con el Partido Justicialista comprende tanto el conflicto y la confrontación en la lucha territorial, la relación y la cooptación de referentes (mantenidos que abandonan el Partido Justicialista, pero que pueden "regresar" en tiempos de campaña electoral), relaciones de convivencia (cuando se trata de organizaciones territoriales, ya institucionalizadas) y, claro está, relaciones de negociación (con las huestes del Partido Justicialista en alguna instancia del poder público).

En suma, durante los años 60 el peronismo, en tanto lenguaje político desde el cual los sectores populares inteligen la dominación social, se desdibuja aceleradamente, al tiempo que las nuevas organizaciones territoriales, a través de las nuevas formas de acción colectiva, harán confluir las apelaciones a la dignidad con un incipiente sentimiento de pertenencia político-comunitario. A partir de allí, aun el clientelismo afectivo se transforma y encuentra obstáculos, atrapado en una dinámica recesiva que muestra la convivencia entre un sistema clientelar múltiple, que afianza las conductas oportunistas, y un fuerte discurso antistatista, que denuncia la manipulación política. De modo que, al rechazo bastante generalizado de

46. Es necesario integrar esta singularidad argentina en un contexto más general, pues el declive y la desorganización del peronismo en la cultura popular coinciden con los fuertes avances de la industria cultural en un mercado cada vez más globalizado.

47. No por casualidad, muchos de los más pastoreados tienen antecedentes de trabajo territorial dentro del partido peronista.

los sindicatos se agregaría en los últimos años el repudio al peronismo político frente al trato extorsivo que éste realizaría en los barrios. No es raro, por ello, que dentro del mundo popular estas diferencias hayan actualizado una vez más la distinción, cara a los sectores radicalizados de los 70, entre un "peronismo de Perón", de raíz más política y organizacional, y un "peronismo de Evita" más ligado a una cultura plebeya e iconoclasta, como expresión auténtica de la gente "de abajo".

La gestación de un nuevo actor social es siempre lenta y dificultosa, atravesada por la necesidad y, al mismo tiempo, plagada de inéditas contingencias. No siempre los tiempos de la movilización y aquellos de la construcción colectiva suelen coincidir o articularse armoniosamente. En la Argentina, las dificultades de esta construcción dan cuenta de la persistencia del peronismo en los sectores populares, más allá de su crisis y debilitamiento. Constatación empírica que debe complementarse con otro dato, suerte de fatalidad innegable, que habla de la capacidad histórica del peronismo para fagocitar, absorber, canalizar y reducir toda expresión novedosa del espectro político y social.

Añadamos que, en este caso, no se trata de un actor como cualquier otro, sino del "desocupado", aquel que no tiene un "lugar" en la sociedad y que por ello mismo aparece, en primera instancia, como "irrepresentable". Por ello la emergencia y consolidación de un movimiento de desocupados deviene a todas luces un "milagro sociológico", como bien lo llamara Pierre Bourdieu (2001), a la hora de referirse a la organización de aquellos que tradicionalmente aparecen como los "excluidos" y son considerados como una "falla del sistema". Sin embargo, en la Argentina las "fallas del sistema" eclosionaron y se tornaron visibles, en una dimensión dramática nunca vista en nuestra sociedad, a costa de la exposición del propio cuerpo en las rutas. Los piqueteros y, pronto, sus organizaciones se revelaron como el hecho político y social más novedoso y más importante de los últimos tiempos.

Hemos sostenido aquí que su génesis no reenvía a un único proceso. Una vez más, el movimiento piquetero no es el producto exclusivo de los piquetes y las puebladas que sacudieron las lejanas provincias argentinas en los últimos años, pero tampoco brotó naturalmente de los asentamientos originados en los 80 en la provincia de Buenos Aires. Es la convergencia de éstos dos afluentes lo que va a permitir la formación, la expansión y aun la posterior potenciación del movimiento piquetero. La confluencia entre, por un lado, acción disruptiva e identidad piquetera, originaria de los piquetes y puebladas del interior del país y, por otro, modelo territorial y marcos organizativos, desarrollados de manera paradigmática en determinadas regiones, sobre todo en La Matanza y el eje sur del conurbano bonaerense. Es este doble origen el que explica tanto la riqueza como la diversidad del movimiento piquetero, al tiempo que nos anticipa algo acerca de su fragmentación inevitable. Más aún, es este mismo doble origen el que nos orienta sobre sus logros, al tiempo que nos advierte acerca de algunas de sus limitaciones.